

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION  
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Vigésima Segunda Reunión del Comité de Expertos  
Del 9 al 13 de septiembre de 2013  
Washington, DC

OEA/Ser.L.  
SG/MESICIC/doc.386/13 rev. 4  
13 septiembre 2013  
Original: Ingles

REPÚBLICA DE GUATEMALA

INFORME FINAL

(Versión adoptada en la Sesión Plenaria del 13 de septiembre 2013)

## SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en Guatemala del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Guatemala en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de Guatemala al cuestionario; la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil; la información recogida por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 2 y el 4 de octubre de 2012 por los miembros del subgrupo de análisis de Guatemala, integrado por San Kitts y Nevis y Suriname, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Guatemala y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas, facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas y le brindó a Guatemala la oportunidad de ofrecer o requerir asistencia técnica para los propósitos de la Convención.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si este es adecuado para los propósitos de la Convención y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Guatemala analizados en este informe son: la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET), el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Organismo Judicial.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Guatemala en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Con respecto a la COPRET, considerar la adopción de las medidas necesarias para transformarla en una institución permanente; la preparación de manuales que describan las funciones de su personal y procedimientos documentados para la ejecución de sus responsabilidades; completar e implementar el programa de capacitación de la COPRET en los ámbitos de transparencia y combate a la corrupción; establecer procedimientos específicos para manejar las denuncias relacionadas con la COPRET; y promover las acciones necesarias para asegurar un mejor cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información.

Con respecto al Ministerio Público, considerar que las decisiones disciplinarias adoptadas con respecto a su personal se puedan implementar efectivamente; nombrar a los miembros requeridos del Consejo del Ministerio Público; e implementar capacitación sobre la Ley de Acceso a la Información Pública.

Con respecto a la Contraloría General de Cuentas, considerar dotarla de los recursos humanos y financieros suficientes para que pueda cumplir adecuadamente sus responsabilidades; sujetar los fideicomisos que se emplean para financiar servicios o proyectos gubernamentales la fiscalización adecuada de la institución; adoptar medidas para promover la presentación de denuncias, incluyendo aceptar denuncias anónimas y a través de Internet; y producir documentos que describan los procedimientos detallados para el personal de la CGC en el desempeño de sus funciones.

Con respecto al Organismo Judicial, considerar: el establecimiento de jueces y tribunales especializados anticorrupción; completar la nueva versión propuesta del Código Procesal Civil; producir o publicar manuales que describan las funciones del personal no judicial, así como procedimientos documentados para determinar la responsabilidad de jueces y magistrados por sus acciones; y producir o publicar un informe anual.

Las buenas prácticas sobre las que Guatemala suministró información se refieren, sintéticamente, al monitoreo de los procesos administrativos y financieros del Organismo Ejecutivo por la COPRET; la reorganización de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público; y la implementación de Juicios por Audiencias por el Organismo Judicial.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Guatemala en la Primera Ronda sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Guatemala en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se determinó cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente, cuáles requerían atención adicional y cuáles precisaban ser reformuladas. Se hizo además un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como Anexo I del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destacan la tipificación del enriquecimiento ilícito por Guatemala a través de la promulgación y la entrada en vigor de la Ley contra la Corrupción.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Guatemala en la Primera Ronda que quedan vigentes o que fueron reformuladas apuntan a propósitos tales como fortalecer la implementación de leyes y sistemas para reglamentar los conflictos de intereses; optimizar la verificación de las declaraciones juradas patrimoniales y considerar darles publicidad; y considerar el diseño y la implementación de políticas de Estado en materia de asistencia recíproca y cooperación técnica.

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA  
CORRUPCIÓN**

**INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN GUATEMALA DE LA  
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA  
CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  
FORMULADAS A DICHO PAÍS EN LA PRIMERA RONDA<sup>1</sup>**

**INTRODUCCIÓN**

**1. Contenido del Informe**

[1] El presente informe se referirá, en primer lugar, al análisis integral de la implementación en Guatemala de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción que fue seleccionada por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la misma (MESICIC) para la Cuarta Ronda de Análisis. Dicha disposición es la prevista en el artículo III, párrafo 9, de la Convención, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, aludirá a las buenas prácticas que en relación con los órganos de control superior objeto de análisis en el presente informe, el Estado analizado ha deseado voluntariamente compartir.

[3] En tercer lugar, de conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos del MESICIC en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Guatemala por el Comité de Expertos del MESICIC en el informe que adoptó para este país en la Primera Ronda, y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes que adoptó para el mismo en la Segunda y Tercera Rondas, los cuales se encuentran publicados en:

**2. Ratificación de la Convención y vinculación al Mecanismo**

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Guatemala depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 3 de julio de 2001.

[5] Asimismo, suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el día 19 de diciembre de 2001.

---

<sup>1</sup>. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 13 de septiembre de 2013, en el marco de su Vigésima Segunda Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 9 al 13 de septiembre de 2013.

## I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

### 1. Respuesta de Guatemala

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de Guatemala en todo el proceso de análisis y, en especial, de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET), la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Guatemala envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes. Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos pueden consultarse en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

[7] Asimismo, el Comité deja constancia que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*,<sup>2</sup> la cual se realizó del 16 al 18 de abril de 2013, por parte de los representantes de San Kitts y Nevis y Suriname, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Guatemala hasta el 18 de abril de 2013, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité; la Metodología para el Análisis de la Implementación de la Disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionada en la Cuarta Ronda; y la Metodología para la Realización de las Visitas *In Situ*.

#### **1. Documentos y opiniones recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores**

[9] El Comité también recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, un documento de la Acción Ciudadana Guatemala – Punto de Contacto Nacional de Transparencia Internacional, que fue remitido por este de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.<sup>3</sup>

[10] Asimismo, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado del 16 al 18 de abril de 2013, se recabó información de otras organizaciones de la sociedad civil y del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

---

<sup>2</sup> La Metodología para la Realización de las Visitas *In Situ* (documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2) está disponible en: [www.oas.org/juridico/spanish/met\\_insitu.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf)

<sup>3</sup> Este documento fue recibido el día 16 de enero de 2013, y se encuentra disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

## **II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA:**

### **ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)**

[11] Guatemala cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que cabe destacar los siguientes: la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET); el Ministerio Público (MP); la Contraloría General de Cuentas (CGC); y el Organismo Judicial.

[12] A continuación se describen brevemente los fines y funciones de los cuatro órganos seleccionados por Guatemala que se analizarán en este informe.

[13] La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET) es una institución de apoyo a la Presidencia, creada para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sus objetivos son fomentar en las entidades del Organismo Ejecutivo la cultura de transparencia y combate a la corrupción mediante la implementación de herramientas que permitan el libre acceso a la información pública y la promoción de un gobierno abierto.

[14] El Ministerio Público (MP) es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, cuyo fin es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Es el órgano competente para el ejercicio de la acción penal pública contra servidores públicos o personas particulares que incurran en delitos de cualquier naturaleza. En consecuencia, recibe, investiga y persigue penalmente los delitos penales ante los tribunales de justicia.

[15] La Contraloría General de Cuentas (CGC) es una institución técnica, descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos, y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas.

[16] El Organismo Judicial es un órgano independiente que juzga y promueve la ejecución de lo juzgado por medio de los tribunales que le integran.

## **1. COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO (COPRET)**

### **1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[17] La Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (“la COPRET” o “la Comisión”) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[18] La COPRET fue creada por medio del Acuerdo Gubernativo No. 360-2012 (“el Acuerdo 360-2012”) con el objeto de coordinar la aplicación de las medidas derivadas de las convenciones internacionales en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto (Artículo 2 del Acuerdo No. 360-2012). Además, el documento que presentó el país analizado

durante la visita *in situ* describe a esta institución como de “... apoyo a las funciones del Presidente de la República para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Organismo Ejecutivo.”<sup>4</sup>

[19] El Artículo 6 del Acuerdo 360-2012 le asigna a la Comisión las siguientes funciones específicas: coordinar el establecimiento de las estrategias, acciones o propuestas pertinentes, a efecto que las dependencias del Organismo Ejecutivo incluyan en su planificación anual, actividades para la promoción de la transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto (Artículo 6(a)); recomendar el diseño de instrumentos para la implementación de los mecanismos de gobierno electrónico, transparencia, combate a la corrupción, la gestión de los entes y los empleados públicos (Artículo 6(b)); promover acciones e iniciativas públicas nacionales e internacionales en materia de transparencia, gobierno electrónico, combate a la corrupción y gobierno abierto para fortalecer la transparencia presupuestaria (Artículo 6(c)); promover las acciones para contribuir al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y a la implementación del gobierno electrónico (Artículo 6(d)); promover una cultura de transparencia y combate a la corrupción (Artículo 6(e)); apoyar en la atención y orientación al ciudadano en temas de transparencia y promover y fomentar su participación (Artículo 6(f)); coordinar la participación del Organismo Ejecutivo en espacios nacionales e internacionales sobre gobierno electrónico, transparencia (Artículo 6(g)); dar seguimiento y velar por la implementación de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de transparencia, gobierno electrónico y combate a la corrupción, así como promover la inclusión en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos internacionales de carácter no vinculante que haya suscrito y ratificado Guatemala (Artículo 6(h)); velar por la armonización de propuestas, programas y acciones de asistencia técnica y financiera que los organismos internacionales o agencias de cooperación internacional ejecutan en Guatemala en los ámbitos anteriores (Artículo 6(i)); y las demás que le asigne el Presidente de la República (Artículo 6(j)).

[20] En cuanto a su estructura, el Artículo 3 del Acuerdo 360-2012 especifica que la COPRET está conformada por la Comisión Presidencial, la cual a su vez está integrada por el Vicepresidente de la República y el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Además, el Artículo 4 del Acuerdo Interno No. 1-2013, establece que los órganos sustantivos de la COPRET son la Comisión Presidencial y el Directorio Ejecutivo, y que éste último incluye las Oficinas del Coordinador y Director Ejecutivo y del Subdirector Ejecutivo, de las cuales dependen las siguientes unidades: Unidad para el Fortalecimiento del Gasto Público, Unidad para Promover la Participación Ciudadana para la Transparencia, Unidad de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y Unidad de Coordinación y Fortalecimiento del Gobierno Electrónico.

[21] El Artículo 4 también crea (1) las Direcciones Administrativas y Financieras: los Departamentos de Administración, Finanzas y Recursos Humanos; (2) Unidades de Apoyo: Unidades Legal, de Planeación, de Comunicación Social y de Cooperación Internacional; y (3) la Unidad de Control Superior, integrada por la Unidad de Auditoría Interna.

[22] Con respecto al alcance de sus funciones, como se dijo arriba, el Artículo 2 del Acuerdo 360-2012 y el Artículo 6 del Acuerdo Interno No. 1-2013 hacen referencia a la coordinación de la Comisión dentro del Organismo Ejecutivo. Además, el Artículo 13 del Acuerdo 360-2012 exige que las dependencias del Organismo Ejecutivo proporcionen la información que la Comisión les solicite.

---

<sup>4</sup> Este documento, denominado COPRET Paneles 3 & 4, se encuentra disponible en:  
[http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

[23] En este sentido, durante la visita *in situ* se explicó que la Comisión no tiene ni jurisdicción ni atribuciones sobre los entes independientes del Estado, como la Contraloría General de Cuentas o el Organismo Judicial, entre otros.

[24] La más alta autoridad de la COPRET es el Coordinador y Director Ejecutivo (Artículo 2, Acuerdo 360-2012), que es nombrado por el Presidente de la República (Artículo 8, Acuerdo 360-2012).

[25] Con respecto al personal de la Comisión, durante la visita *in situ* se explicó que el personal de la COPRET es contratado según las necesidades de las distintas unidades de la institución y con base en las funciones establecidas por el Acuerdo Interno No. 1-2013. También se explicó que los Directores y Subdirectores de las diferentes unidades de la COPRET son personal de confianza del Coordinador y que, por lo tanto, pueden ser nombrados y destituidos libremente.

[26] El resto de la Comisión se contrata por concurso basado en méritos. Durante el curso de la visita *in situ*, los representantes de la COPRET señalaron que el personal de la Secretaría de Transparencia (la actual COPRET), fue contratado a través de una empresa externa contratada para manejar el reclutamiento. Además, se explicó que gran parte del personal de la institución está integrado por personas que han sido funcionarios públicos durante mucho tiempo y tienen experiencia en diversos ámbitos relacionados con las responsabilidades de la Comisión.

[27] Todo el personal de la COPRET está sujeto a las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones que les imponen a los servidores públicos la Ley de Servicio Civil, Decreto No. 1748, y su Reglamento, el Acuerdo Gubernativo No. 18-98.

[28] Asimismo, la Ley de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos también es aplicable a los empleados de la COPRET y contiene disposiciones que establecen incompatibilidades y prohibiciones aplicables a los empleados públicos. Además, esta ley establece tres tipos de responsabilidades para los servidores públicos: responsabilidad administrativa, cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo o cuando se incurre en negligencia o incumplimiento de leyes y demás disposiciones, pero no se ocasionan daños o perjuicios patrimoniales (Artículo 8); responsabilidad civil, cuando la acción u omisión se comete en perjuicio y daño del patrimonio público (Artículo 9); y responsabilidad penal, cuando la decisión, resolución, acción u omisión constituye un delito o falta de conformidad con la ley penal.

[29] Con respecto a la existencia de manuales que describan las funciones del personal, durante la visita *in situ* se explicó que la Comisión está en proceso de producir estos manuales, de acuerdo con las normas que exige la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC). Asimismo, la COPRET está preparando manuales de procedimientos, funciones y protocolos, como lo requiere el Numeral 1.10 de las Normas Generales de Control Interno de la Contraloría General de Cuentas.<sup>5</sup> Una vez terminados, se explicó que estos manuales se adoptarán a través de Acuerdos Internos de la COPRET y de conformidad con el Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 360-2012, que autoriza a la Comisión a emitir las disposiciones internas que considere necesarias.

---

<sup>5</sup> El Numeral 1.10 de las Normas Generales de Control Interno de la Contraloría General de Cuentas prevé lo siguiente: *"1.10 MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad."*



[30] Con respecto a la toma de decisiones por parte de la COPRET, durante el curso de la visita *in situ* se explicó que como institución de apoyo, la COPRET no toma decisiones en lo que respecta a la emisión de sanciones penales o administrativas. Adicionalmente, los documentos que entregó la COPRET durante la visita *in situ* señalan lo siguiente con respecto a la toma de decisiones por la Comisión: *“Las estrategias y acciones para la promoción de la transparencia y gobierno abierto, se elaboran dentro del aspecto técnico de las Direcciones de Fortalecimiento a la Gestión Pública, Dirección de Indicadores e Iniciativas de Transparencia, y Dirección de Gobierno Electrónico para ser presentados y discutidos con la Comisión Presidencial como órgano colegiado, y una vez aprobado el plan de acción para la aplicación de las mismas, se valida en una mesa interinstitucional, para que sea viable su aplicación.”*<sup>6</sup>

[31] *“Es decir la decisión de aprobación de las estrategias está a cargo de la Vicepresidente y el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, y la implementación de las mismas en las instituciones queda a cargo de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia para que sea agendada en las políticas públicas, y de cada Ministerio de Estado.”*<sup>7</sup>

[32] *“En relación a los casos de atención al ciudadano por casos de posible corrupción, queda en decisión de la Directora Ejecutiva, luego de la presentación del análisis del caso, el presentar la denuncia ante el Ministerio Público si existieren indicios de un hecho penal,<sup>8</sup> o bien ante la Contraloría General de Cuentas en caso que del análisis se detecte una posible responsabilidad administrativa.”*<sup>9</sup>

[33] Asimismo, en cuanto a los mecanismos de revisión o apelación de las decisiones adoptadas por la COPRET, el Decreto No. 119-96 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, señala que contra las resoluciones dictadas por las más altas autoridades una institución podrá interponerse recurso de reposición (Artículo 9), mientras que contra las decisiones dictadas por las autoridades de una institución, excepto las más altas, se puede interponer el mecanismo de revocatoria (Artículo 7).

[34] Con respecto a controles internos, la COPRET tiene una Unidad de Auditoría Interna creada de conformidad con el Artículo 17 del Acuerdo Interno No. 1-2013. Esta Unidad, que tiene independencia operativa, le presta apoyo directo al Coordinador de la COPRET y es responsable, entre otras cosas, de la evaluación continua de la estructura de control interno de la institución, así como de los sistemas operativos y del flujo de información institucional. Esta Unidad también tiene un Manual para Auditorías Especiales (no programadas).

[35] En lo que respecta a mecanismos para abordar reclamos, quejas o denuncias de irregularidades en relación con el cumplimiento de sus objetivos y la conducta de su personal, los funcionarios de la COPRET explicaron durante el proceso de análisis que el Dirección de Recursos Humanos es responsable de manejar estas quejas y que de conformidad con el Artículo 74 de la Ley de Servicio Civil, se pueden imponer cuatro categorías de sanciones: (1) amonestación verbal por faltas leves; (2) amonestación escrita; (3) suspensión sin goce de sueldo hasta por treinta días; y (4) suspensión sin goce de sueldo en casos de detención y prisión.

---

<sup>6</sup> Ver el documento denominado COPRET Paneles 3 & 4, se encuentra disponible en:

[http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

<sup>7</sup> Ver el documento denominado COPRET Paneles 3 & 4, se encuentra disponible en:

[http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

<sup>8</sup> Los representantes de la COPRET explicaron que esto se refiere a denuncias de oficio.

<sup>9</sup> *Ibíd.*

[36] En lo que toca al fortalecimiento institucional de la COPRET, durante la visita *in situ* los representantes de la institución explicaron que a través de su Dirección de Recursos Humanos, la COPRET está preparando un plan para la capacitación de su personal en las unidades de apoyo y sustantivas y que, adicionalmente, firmaron un acuerdo con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para que imparta capacitación adicional para el personal de la COPRET. Actualmente el INAP ofrece las siguientes oportunidades: licenciatura y maestría en Administración Pública, doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas, diplomados en la Ley Contra la Corrupción, diplomados en Administración Pública y diplomados en Gobierno Electrónico. Los representantes de la COPRET indicaron que se prevé que se crearán programas relevantes adicionales, como diplomados en Gobierno Abierto, Convenios Internacionales Anticorrupción, Fiscalización Social de la Gestión Pública; y cursos en presupuestos basados en resultados, los sistemas de gestión pública existentes (SIGES, SICOIN y SIAF),<sup>10</sup> auditorías gubernamentales, relaciones públicas y trabajo en equipo.

[37] Asimismo, con respecto a la implementación y el uso de tecnologías modernas para facilitar su trabajo, la COPRET observa que se está llevando a cabo una evaluación de las instituciones públicas dentro del marco de la Red de Naciones Unidas para la Administración Pública, que examina cuatro áreas: (1) capital humano, donde se analiza el profesionalismo del personal; (2) servicios en línea, que evalúa la facilidad de uso y la descripción de los servicios que ofrecen las instituciones gubernamentales a través de sus portales en Internet; (3) participación electrónica, que evalúa la capacidad del público para mantenerse informado y para suministrar retroalimentación sobre los programas y servicios del gobierno; y (4) infraestructura, que evalúa el hardware y el software que utilizan las instituciones para cumplir con sus responsabilidades internas, hacia el público y la interconectividad con otras instituciones.

[38] Asimismo, la COPRET ha creado un sistema electrónico en línea para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas para los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo en ámbitos como alimentos, uso telefónico, viáticos y combustible. El público puede acceder a este sistema a través del portal en Internet de la COPRET, en: <http://www.transparencia.gob.gt>. La COPRET también ha creado el portal en Internet para el Plan Nacional de Reconstrucción, disponible en <http://plandereconstruccion.transparencia.gob.gt/>, para promover la transparencia y la rendición de cuentas en las actividades de reconstrucción tras el terremoto de noviembre de 2012.

[39] En lo relativo a asegurar los recursos presupuestarios para las operaciones de la COPRET, el Artículo 9 del Acuerdo No. 360-2012 señala que el Ministerio de Finanzas Públicas asignará a la Comisión los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En este sentido, durante la visita *in situ*, los representantes de la COPRET indicaron que para 2012, se le asignaron a la institución predecesora de la COPRET (la SECYT) aproximadamente 15 millones de quetzales, lo que fue suficiente, pues la institución operó solamente durante seis meses. Los representantes de la COPRET explicaron que para 2013 se le han asignado a la Comisión aproximadamente 30 millones de quetzales. Señalaron asimismo que los recursos financieros que se le asignaron a la institución son suficientes para que lleve a cabo adecuadamente sus funciones.

[40] Con respecto a los mecanismos de coordinación con otros órganos de control superior del Estado y para obtener apoyo del público para el cumplimiento de sus funciones, en marzo de 2013, la COPRET firmó un Convenio de acción contra la corrupción. El Convenio fue suscrito por el

---

<sup>10</sup> El SIGES es el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SICOIN es el Sistema de Contabilidad Integrado y el SIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera.

Presidente de la República, el Presidente del Organismo Judicial, la Fiscalía General, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación. Como resultado de este Convenio, en abril de 2013 se llevó a cabo por primera vez una mesa de fuerza de tarea anticorrupción.

[41] Asimismo, con respecto a posibles duplicaciones entre las funciones de la COPRET en la recepción de quejas relacionadas con denuncias de corrupción o falta de transparencia, los funcionarios de la COPRET explicaron que desde el momento en que se recibe una queja, se sigue un procedimiento mediante el cual se llevan a cabo comprobaciones cruzadas para determinar si (1) la COPRET ha recibido anteriormente quejas sobre el mismo asunto; (2) otras instituciones competentes han recibido quejas sobre el mismo asunto; y (3) hay indicaciones de que se ha llevado a cabo un delito o falta administrativa. En caso de presentarse cualquiera de estas situaciones, la COPRET remite el caso a institución correspondiente, junto con la documentación de respaldo, y además coopera en la investigación subsiguiente.

[42] La COPRET también ha desarrollado la función que se le asignó de coordinar las actividades del Organismo Ejecutivo a través de distintas mesas, como: (1) Mesa Técnica sobre Gobierno Abierto con la participación de los Directores de Comunicación Social de todas las entidades y los Directores de Planificación de los distintos Ministerios del Organismo Ejecutivo; (2) Mesa Redonda Técnica Institucional sobre Gobierno Electrónico, con la participación de entidades responsables del desarrollo de sistemas, como el Programa Nacional de Competitividad, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología; y (3) Mesa Técnica para la Reconstrucción Nacional, creada como un grupo técnico ad hoc para informar y asistir a la ciudadanía tras el terremoto de noviembre de 2012.

[43] También se está negociando un memorando de entendimiento con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México (IFAI) con el objetivo de promover acciones conjuntas contra la corrupción y para adherirse a la Red de Transparencia y Acceso a la Información.

[44] La COPRET tiene tres mecanismos principales para la rendición de cuentas y para suministrar información al público: (1) el portal de la COPRET en Internet, <http://www.transparencia.gob.gt>, que ofrece información sobre el trabajo de la institución, así como mecanismos por medio de los cuales el público puede solicitar información o presentar quejas relacionadas con corrupción o falta de transparencia;<sup>11</sup> (2) informes periódicos y anuales al Congreso de la República, como lo exige el Artículo 24 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que incluye informes analíticos sobre la ejecución del presupuesto que se le deben entregar al Congreso cada cuatro meses a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Estos informes están disponibles en el portal del Congreso en Internet. También se les remiten copias de estos informes a la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Contraloría General de Cuentas; y (3) informes semestrales y anuales, que no son obligatorios ni reglamentados, pero que la institución se propone publicar en enero de cada año como parte de sus buenas prácticas. Se explicó que los informes incluirán información sobre los diversos proyectos y planes de trabajo de la institución, así como los objetivos y el alcance de cada proceso, así como sus resultados y los procesos pendientes de conclusión. El informe anual incluirá también información financiera de la COPRET.

---

<sup>11</sup> Durante el curso de la visita *in situ*, los representantes de la COPRET señalaron que el portal en Internet de la institución también cumple con el Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que requiere que todas las instituciones tengan un portal electrónico.

[45] Además, el documento presentado por los representantes de la COPRET durante la visita *in situ* explica que para promover la transparencia, la institución ha impulsado el seguimiento de las iniciativas de transparencia del Banco Mundial, incluyendo la Iniciativa de Transparencia en el sector de la Construcción (COST) y la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE). Asimismo, Guatemala hizo una declaración ante la Sociedad de Gobierno Abierto (OGP), cuya ejecución implica la creación de mayores oportunidades de participación ciudadana y control social.<sup>12</sup>

## **1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[46] La COPRET cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[47] En primer lugar, el Comité observa que la COPRET es de creación reciente. Durante la visita *in situ*, los representantes de la COPRET explicaron que su institución predecesora, la Secretaría de Control y Transparencia (SECyT), fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en noviembre de 2012. Los representantes explicaron que aunque la creación de la Secretaría fue legal, la Constitución requiere que se determinen por ley las atribuciones del Secretario (la más alta autoridad). De acuerdo con las autoridades de la COPRET, tras la creación de la Secretaría, la legislatura nunca aprobó el proyecto de ley sobre las atribuciones del Secretario, lo que dio lugar a la sentencia de inconstitucionalidad.

[48] Consiguientemente a esta sentencia se creó la COPRET para continuar las funciones que anteriormente cumplía la SECyT, además de otras responsabilidades, incluyendo la promoción del gobierno electrónico. Durante la visita *in situ*, los representantes de la COPRET subrayaron la necesidad de que la COPRET se transforme de nuevo en una Secretaría permanente y de que las funciones de la autoridad de la institución sean aprobadas formalmente por la legislatura, lo cual guarda particular importancia dado que esta institución coordina todas las iniciativas de transparencia y anticorrupción del Organismo Ejecutivo, y que el Acuerdo No. 360-12, por el cual se crea la Comisión, establece que existirá solamente durante seis años.

[49] Los representantes de *Acción Ciudadana*, en las reuniones con las instituciones de la sociedad civil durante el curso de la visita *in situ*, hicieron eco de la importancia de que el organismo anticorrupción del Organismo Ejecutivo disponga de cierto grado de permanencia e institucionalidad. Los representantes señalaron que históricamente los organismos anticorrupción del Organismo Ejecutivo no han sido creados por la legislatura, por lo que carecen de independencia. Añadieron que con frecuencia estos organismos son disueltos y sustituidos cuando asume el poder una nueva administración, lo que reduce aun más el impacto y la continuidad de sus actividades.

[50] En vista de las consideraciones anteriormente expuestas, el Comité estima importante que el país analizado considere adoptar las leyes necesarias para transformar a la COPRET en una institución permanente del Organismo Ejecutivo. Cabe señalar que durante la visita *in situ*, los representantes de la COPRET resaltaron este punto como la principal dificultad para el cumplimiento adecuado de sus funciones. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 1.4.1 del capítulo II de este informe).

---

<sup>12</sup> Véase el documento presentado por la COPRET durante la visita *in situ*, Pág.15, *supra* nota 4.

[51] En segundo lugar, el Comité observa que en la respuesta al cuestionario presentada por el país analizado se indica, con respecto a las dificultades para el cumplimiento de las funciones, que la SECyT carecía de “... *la independencia necesaria para cumplir sus responsabilidades de control superior preventivo. Es por ello necesario fortalecerla, a fin de que funcione en todas las instituciones y entidades del Estado, pues actualmente está limitada al Organismo Ejecutivo.*”<sup>13</sup>

[52] Aunque el Comité reconoce que el comentario anterior del país analizado se efectuó en relación con la institución predecesora de la COPRET, la SECyT, el Comité considera que el comentario es aplicable a la COPRET, tomando en cuenta que (1) la COPRET sustituyó a la SECyT; (2) la COPRET tiene en gran parte las mismas funciones que tenía la SECyT en los ámbitos de la transparencia y el combate a la corrupción; y (3) el campo de acción de la COPRET también se limita al Organismo Ejecutivo.

[53] En vista de estas consideraciones, el Comité estima importante que el país analizado examine si es necesario implementar los cambios necesarios para (1) otorgarle a la COPRET un grado mayor de independencia para que cumpla mejor sus funciones relacionadas con la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción; o (2) extender las atribuciones de la COPRET para permitirle llevar a cabo sus funciones relacionadas con la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción con respecto a instituciones y entidades que no forman parte del Organismo Ejecutivo (ver recomendación 1.4.2 del capítulo II de este informe).

[54] En tercer lugar, y con respecto a la existencia de manuales que describan las funciones del personal de la COPRET, el Comité observa que estos están todavía en proceso de producción. El Comité formulará una recomendación en este sentido, tomando en consideración que la Comisión empezó a operar apenas en 2013 (ver recomendación 1.4.3 del capítulo II de este informe).

[55] En cuarto lugar, y en el mismo orden de ideas, el Comité observa que también se están preparando manuales de procedimientos documentados para la ejecución de responsabilidades, como lo requieren las Normas Generales para el Control Interno de la Contraloría General de Cuentas. El Comité también formulará una recomendación sobre este punto (ver recomendación 1.4.4 del capítulo II de este informe).

[56] En quinto lugar, el Comité observa que la COPRET está todavía en proceso de diseñar e implementar su programa de capacitación, como se señaló arriba, en la sección 1.1. El Comité formulará una recomendación sobre este punto (ver recomendación 1.4.5 del capítulo II de este informe).

[57] En sexto lugar, y con respecto a los mecanismos para suministrar información al público, el Comité observa que el portal de la COPRET en Internet contiene gran cantidad de información y herramientas útiles, como el mecanismo Guate Transparente y una herramienta para presentar quejas relacionadas con falta de transparencia o corrupción. Sin embargo, el Comité estima que podría ser útil que la institución publicara también sus documentos básicos, como el Acuerdo Gubernativo No. 360-2012, así como otras disposiciones creadas para reglamentar sus funciones y actividades (ver recomendación 1.4.6 del capítulo II de este informe).

---

<sup>13</sup> Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario, Pág. 72, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

[58] En séptimo lugar, con respecto a los mecanismos para la rendición pública de cuentas en la COPRET, el Comité observa que no existen normas relacionadas con los Informes Anuales que la institución planea producir. El Comité estima que sería útil que el país analizara la emisión de disposiciones que requieran específicamente la preparación y publicación de estos informes, así como lineamientos claros sobre su contenido. El Comité formulará una recomendación al respecto (véase la recomendación 1.4.7 del Capítulo II de este informe).

[59] En octavo lugar, y en relación con los controles internos en la COPRET, el Comité observa la ausencia de un procedimiento interno o unidad responsable específicamente de recibir y manejar las quejas relacionadas con los funcionarios o el personal de la COPRET. El Comité formulará una recomendación sobre este punto (ver recomendación 1.4.8 del capítulo II de este informe).

[60] En noveno lugar, el Comité observa que el artículo 6(d) del Acuerdo Gubernativo No. 360-2012, dispone que la COPRET tiene la responsabilidad de promover acciones que contribuyan al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de entidades del Organismo Ejecutivo. En este sentido, durante la visita *in situ*, los representantes de la COPRET hicieron una demostración respecto de la manera en cómo se pueden presentar solicitudes de información vía Internet. Asimismo, explicaron que en cumplimiento de sus obligaciones legales, la COPRET ha estado coordinando con otras instituciones del Ejecutivo para asegurar el cumplimiento con la citada Ley y que parte de este proceso involucra un logotipo<sup>14</sup> de uso obligatorio en esta rama de Gobierno.

[61] No obstante estos y otros esfuerzos, durante la visita *in situ*, los representantes de la organización de la sociedad civil Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, se refirieron a varias áreas de preocupación con respecto a la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2009. En particular, señalaron: (1) la falta de cumplimiento del artículo 10 que requiere que las instituciones mantengan, como mínimo, información institucional básica, actualizada y disponible; (2) en 2012, sólo 227 de las 1300 (17%) de las instituciones obligadas a presentar un informe sobre acceso a la información a la Procuraduría de Derechos Humanos, de acuerdo al artículo 48, habían cumplido con esta obligación;<sup>15</sup> (3) la falta de aplicación del artículo 61 que prevé sanciones administrativas y penales por incumplimiento de la Ley. Sobre este particular, durante la visita *in situ*, Acción Ciudadana notó que se han presentado ante el MP denuncias en materia de acceso a la información, pero representantes del mismo MP no están seguros a que unidad compete la responsabilidad de investigar tales denuncias; y (4) la falta generalizada de parte de los funcionarios públicos sobre sus obligaciones legales en materia de acceso a la información.<sup>16</sup>

[62] Con respecto a los puntos anteriores, el Comité considera que para asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y garantizar el cumplimiento de la Ley, es importante que la COPRET continúe con sus actividades de coordinación con respecto a las entidades del Ejecutivo.

---

<sup>14</sup> Se diseñó un botón estándar que identifique en todas las páginas de las entidades del Organismo Ejecutivo (14 Ministerios y 29 Secretarías y Comisiones) donde pinchar, para acceder al botón de INFORMACIÓN PÚBLICA, para tener acceso a la información obligatoria requerida por los artículos 10 y 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

<sup>15</sup> Ver la presentación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), disponible en:  
[http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

<sup>16</sup> Las Municipalidades, Entidades Descentralizadas y Autónomas, salen del campo de acción de la COPRET.



[63] Con respecto a los órganos de control analizados en este informe que no pertenecen al Ejecutivo, pero que están igualmente obligados a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, el Comité denota la existencia de un acuerdo interinstitucional entre la COPRET y estas instituciones (CGC, MP y Organismo Judicial), el cual prevé, entre otros aspectos, un plan de acción para mejorar la percepción ciudadana en cuanto a la lucha contra la corrupción. Asimismo, el Comité observa que la COPRET ha preparado un borrador de Plan Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción.<sup>17</sup> En este sentido, el Comité considera útil que la COPRET incluya acciones para mejorar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública en los planes que se acuerden, y también en el citado Plan Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción preparado por ésta. (ver recomendación 1.4.9 del capítulo II de este informe).

### **1.3. Resultados del marco jurídico y otras medidas**

[64] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados de la COPRET con respecto al cumplimiento de sus funciones, entre ellos los siguientes:

[65] En primer lugar, con respecto a medidas relacionadas con la prevención de la corrupción, durante la visita *in situ* los representantes de la COPRET informaron que un grupo de 290 servidores públicos habían concluido la primera fase de capacitación en gobierno electrónico y la Ley contra la corrupción. Se prevé que se impartirá capacitación de este tipo a más de dos mil servidores públicos durante 2013.<sup>18</sup>

[66] También se informó sobre un diplomado sobre la Ley contra la Corrupción que se está implementando por iniciativa de la Vicepresidencia de la República y la COPRET, con el apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).<sup>19</sup> A la fecha de la visita *in situ*, aproximadamente 500 servidores públicos de 78 instituciones del sector público habían tomado el curso.

[67] La Comisión también coordinó el Plan de Gobierno Electrónico, que incluye una mesa redonda técnica con las distintas instituciones públicas involucradas, como el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), el INAP y el Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico de la COPRET. La elaboración de este plan es el primer paso para permitir que las agencias del sector público sean evaluadas por la Red de Naciones Unidas para la Administración Pública en las áreas de capital humano, infraestructura, servicios en línea y participación ciudadana.<sup>20</sup>

[68] También se produjo un Plan de Gobierno Abierto, que dio como resultado la organización de mesas redondas técnicas orientadas a fomentar las acciones de la sociedad civil organizada y los sectores comercial y académico y a conducir a la auditoría social.<sup>21</sup> En las mesas redondas técnicas se ha presentado, entre otra información, el Plan Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción propuesto, para sus observaciones.

---

<sup>17</sup> Ver la presentación sobre las mejores prácticas de la COPRET, disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

<sup>18</sup> Ver también el documento COPRET Paneles 3 & 4, *supra* nota 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

[69] Durante la visita *in situ*, los representantes de la COPRET explicaron que la SECyT (ahora la COPRET), emitió alertas relacionadas con mal manejo o corrupción en varios sectores, que condujeron ya sea a la dimisión de los ministros responsables o a que se les requiriera informar al respecto a las comisiones del Congreso. Los representantes explicaron que la COPRET seguirá cumpliendo esta función.

[70] Asimismo, durante la visita in-situ, los representantes de la COPRET presentaron un borrador de Plan Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción, que contiene lineamientos para las instituciones públicas sobre medidas preventivas y de gobierno abierto.

[71] Otra función que anteriormente cumplía la SECyT y que ahora continúa la COPRET es recibir y efectuar un análisis preliminar de las denuncias de corrupción o falta de transparencia. En este sentido, durante la existencia de la SECyT (de abril de 2012 a febrero de 2013), esa institución recibió 582 quejas. Desde la creación de la COPRET en febrero de 2013 hasta la fecha de la visita *in situ*, la institución había recibido 74 quejas.

[72] Junto con esta información, los representantes de la COPRET presentaron gráficos que indican que el número de quejas recibidas por la SECyT fue aumentando mes a mes tras su creación, pero se redujo en los meses siguientes a la declaración de inconstitucionalidad. Asimismo, desde su creación en febrero de 2013, el número de quejas recibidas por la COPRET ha aumentado mensualmente, de 0 quejas recibidas en febrero a 16 en marzo y a 57 quejas recibidas a la fecha de conclusión de la visita *in situ* (18 de abril de 2013).<sup>22</sup>

[73] En relación con las cifras y la información anteriores, el Comité observa que desde su respectiva creación, la SECyT y ahora la COPRET han desempeñado un papel importante en la prevención y detección de actos de corrupción y falta de transparencia.

[74] No obstante, con respecto a las quejas recibidas y procesadas por la COPRET, el Comité observa la ausencia de información que indique el tipo de violación que ocasionó las denuncias. El Comité estima que podría ser útil, particularmente en relación con las funciones de la COPRET relacionadas con la prevención de actos de corrupción, que mantuviera estadísticas que mostraran no solamente los resultados de las denuncias en general, sino que también indicaran el número de cada tipo de violación alegada. Esta información podría ser útil para que COPRET determinara los ámbitos a los que se debería prestar mayor atención y a los que debería enfocar sus actividades de prevención. El Comité formulará una recomendación teniendo en cuenta este hecho (ver recomendación 1.4.9 del capítulo II de este informe).

#### **1.4. Conclusiones y recomendaciones**

[75] Con base en el análisis integral anterior con respecto a la COPRET, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[76] **Guatemala ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.**

[77] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

---

<sup>22</sup> *Ibíd.*



- 1.4.1. Adoptar las leyes necesarias para transformar a la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico en una institución permanente del Organismo Ejecutivo con presupuesto propio (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Examinar si es necesario implementar los cambios necesarios para:
  - a. Otorgarle a la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico un grado mayor de independencia para que cumpla mejor sus funciones relacionadas con la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
  - b. Extender las atribuciones de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico para permitirle llevar a cabo sus funciones relacionadas con la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción con respecto a instituciones y entidades que no forman parte del Organismo Ejecutivo (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.3. Completar el proceso de preparación de manuales que describan las funciones del personal de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Completar el proceso de preparación de manuales que contengan procedimientos documentados para la ejecución de las responsabilidades del personal de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Completar el diseño y la implementación del programa de capacitación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico en los ámbitos de transparencia y combate a la corrupción para el personal de la institución, los servidores públicos de otras instituciones y el público en general, según sea pertinente (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Cerciorarse de que los documentos básicos de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, como el Acuerdo Gubernativo que creó la institución, así como los Acuerdos y demás documentos que produce, se publiquen en su portal en Internet (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.7. Emitir las disposiciones necesarias para requerir la preparación y publicación de los informes anuales de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, que incluyan lineamientos claros sobre su contenido (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.8. Establecer procedimientos específicos para manejar las denuncias sobre el cumplimiento de las responsabilidades de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, así como las relacionadas con el desempeño de los funcionarios y el personal de la COPRET (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).

- 1.4.9. Incluir lineamientos para mejorar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Plan Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción; y promover, en coordinación con los órganos de control relevantes, incluyendo, entre otros, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, y el Organismo Judicial, las acciones necesarias para asegurar un mayor cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública, incluyendo, entre otras, actividades de capacitación para los funcionarios públicos con respecto a sus obligaciones bajo la ley, y mecanismos para disseminar información al público sobre el ejercicio de este derecho. (ver sección 1.2 del capítulo II de este informe).
- 1.4.10. Mantener estadísticas que no solamente muestren la disposición de las denuncias recibidas y procesadas por la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, sino que indiquen también el número de cada tipo de falta alegada en las quejas, de tal manera que pueda utilizarse esta información para determinar los ámbitos que pudieran requerir actividades preventivas adicionales (ver sección 1.3 del capítulo II de este informe).

## **2. MINISTERIO PÚBLICO (MP)**

### **2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[78] El Ministerio Público (MP) cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[79] El Artículo 251 de la Constitución Política de la República, que establece que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, responsable de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

[80] El Artículo 252 establece además que el jefe del Ministerio Público es el Fiscal General, a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Dicho Artículo establece también que el Fiscal General deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para ser designado.<sup>23</sup> Asimismo, el Fiscal General es nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del País, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio. Por último, el Artículo 251 también prevé que el Fiscal General durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones; le otorga las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y señala que el Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada.<sup>24</sup>

[81] Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), Decreto No. 40-94, que en su Artículo 2 establece las siguientes funciones del Ministerio Público: (1) Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales; (2) ejercer la acción civil en los casos previstos

---

<sup>23</sup> Véase también el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

<sup>24</sup> El Artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que “*Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece...*”

por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada; (3) dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos; y (4) preservar el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

[82] El Artículo 3 de la LOMP prevé que el Ministerio Público actuará independientemente, por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los Organismos del Estado, salvo lo establecido en la LOMP.

[83] Con respecto a su presupuesto, el Artículo 3 establece que tendrá una partida en el Presupuesto General de la Nación y le otorga autonomía para la ejecución de su presupuesto. En este sentido, la respuesta del país analizado señala que *“los recursos presupuestarios se garantizan con los aportes provenientes del Gobierno Central, los cuales son aprobados anualmente por el Congreso de la República, y se complementan con aportes de la cooperación internacional tanto en forma de proyectos como de convenios bilaterales de donación”*.<sup>25</sup>

[84] el Artículo 9 de la LOMP establece que el Ministerio Público está integrado por los órganos siguientes: (1) el Fiscal General de la República, (2) el Consejo del Ministerio Público, (3) los Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección, (4) los Agentes Fiscales y (5) los Auxiliares Fiscales.

[85] El Artículo 17 de la LOMP establece que el Consejo del Ministerio Público estará integrado por el Fiscal General, quien lo presidirá, tres fiscales electos en asamblea general de fiscales del MP, de entre los fiscales distritales y de sección y tres miembros electos por el Organismo Legislativo, de entre los postulados no seleccionados a Fiscal General.

[86] De acuerdo con el Artículo 18 de la LOMP, corresponden al Consejo del Ministerio Público, entre otras, las siguientes funciones: (1) proponer al Fiscal General el nombramiento de los fiscales de distrito, fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales, (3) acordar a propuesta del Fiscal General la determinación de la sede de las fiscalías de distrito, así como la creación o supresión de las secciones del Ministerio Público, (4) asesorar al Fiscal General y (5) las demás funciones establecidas por la ley.

[87] El MP también tiene una Fiscalía Contra la Corrupción, creada por el Consejo del MP a solicitud de la Fiscalía General a través del Acuerdo No. 03-99, cuyo Artículo 1 señala que esta oficina investiga y persigue actos de corrupción en los que se encuentren implicados funcionarios y empleados públicos.

[88] Con respecto al alcance de sus funciones, el Artículo 10 de la LOMP establece que la autoridad del MP se extiende a todo el territorio nacional. En este sentido, la respuesta del país analizado señala que no hay excepciones para las acciones del MP.<sup>26</sup> Asimismo, el Artículo 5 de la LOMP establece que el MP es *“único e indivisible para todo el Estado”*.

[89] Con respecto al ejercicio de funciones concurrentes, la respuesta del país analizado indica que *“La función del Ministerio Público... es independiente y se lleva a cabo en coordinación con el Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y demás instituciones intervinientes en los procesos penales. El Ministerio Público para el cumplimiento de sus funciones se encuentra facultado para pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o*

---

<sup>25</sup> Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario, pág. 53, *supra* nota 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, pág. 47.

*semiautónomas.*”<sup>27</sup> En la respuesta también se observa que no existen mecanismos de solución de conflictos de competencia con otras instituciones, ya que las facultades de persecución penal y de investigación le corresponden exclusivamente al Ministerio Público.<sup>28</sup>

[90] La respuesta del país analizado observa con respecto a la coordinación con otros entes estatales que existen una serie de mecanismos formales, como convenios interinstitucionales. Durante el curso de la visita *in situ*, los representantes del MP indicaron que recientemente el MP celebró un acuerdo interinstitucional que incluye a la Contraloría General de Cuentas, el Organismo Judicial, la COPRET y la Procuraduría General. Además, los representantes señalaron que también se dan intercambios informales de información entre el MP y otras instituciones y organizaciones, así como mesas redondas en las que participan diferentes instituciones, dependiendo del tema de que se trate.

[91] Con respecto a la toma de decisiones por el MP, la respuesta del país analizado observa que son funciones del Fiscal General determinar la política general de la institución y los criterios para el ejercicio de la persecución penal.<sup>29</sup> Además, de conformidad con el Artículo 18 de la LOMP, el Consejo del MP es responsable, entre otras cosas, de proponer al Fiscal General el nombramiento de los fiscales de distrito, fiscales de sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales (Artículo 18(1)); y de asesorar al Fiscal General de la República cuando él lo requiera (Artículo 18(4)).

[92] Con respecto a mecanismos internos para objetar decisiones, el Artículo 68 de la LOMP establece un procedimiento a través del cual los fiscales que reciben una instrucción que consideren contraria a la ley pueden objetarla (por escrito) a quien la emitió. Si este último insiste en la legitimidad de la instrucción, ésta se remite al superior jerárquico inmediato, quien decidirá y podrá optar por escuchar a una junta de fiscales bajo su dirección o solicitar un dictamen al Consejo del Ministerio Público. Cuando la instrucción objetada provenga del Fiscal General de la República, el Artículo 68 establece además que el Consejo del MP decidirá sobre el asunto.

[93] Con respecto a mecanismos externos de apelación, la respuesta del país analizado al cuestionario señala que *“la revisión de las decisiones de la máxima autoridad del Ministerio Público puede realizarse a través de la utilización de los recursos y acciones establecidas para el efectivo control de la constitucionalidad”*.<sup>30</sup>

[94] Los recursos humanos del Ministerio Público se reclutan conformidad con la LOMP, cuyo Artículo 75 establece que los nombramientos para fiscales de distrito y sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales se realizan previo concurso tomando en cuenta los requisitos para el cargo y los antecedentes y experiencia de los candidatos. El Artículo 77 requiere que el Consejo del MP conforme un Tribunal de Concurso para evaluar a los candidatos y preparar una lista de los seleccionados que comenzará con el que haya obtenido la mayor calificación hasta el que haya obtenido la menor. Asimismo, el Artículo 78 requiere que los nombramientos para cubrir cargos se realicen eligiendo exclusivamente a los candidatos de la lista en orden de mérito.

[95] Con respecto al personal administrativo, el Artículo 59 de la LOMP establece que el Fiscal General emitirá las reglas para la contratación del personal administrativo del Ministerio Público.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, pág. 47.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pág. 48.

<sup>30</sup> *Ibid*.

[96] Con respecto a la disciplina del personal del MP, el Artículo 62 de la LOMP establece que impondrán amonestaciones los fiscales de distrito o de sección y los jefes de las dependencias del MP y, en el caso de remociones y suspensiones, la Fiscalía General. Además, el Artículo 63 de la LOMP establece, entre otras cosas, un mecanismo para que una persona sancionada presente recurso de apelación contra la decisión, y con respecto a decisiones emitidas por la Fiscalía General, las apelaciones son oídas por el Consejo del MP. El Artículo 63 también establece que la sanción correspondiente no podrá ejecutarse en tanto no finalice el proceso de apelación.

[97] En cuanto a la existencia de manuales o documentos para la ejecución de las tareas, el país analizado, en su respuesta, señala que existen manuales de procedimiento que son complementados por las Instrucciones Generales emitidas por el Fiscal General, así como por un Manual de Normas y Procedimientos de Recursos Humanos, emitidos conforme al Acuerdo No. 47-2010.<sup>31</sup>

[98] Con respecto al fortalecimiento institucional e implementación de tecnologías o sistemas modernos, el país analizado, en su respuesta al cuestionario, señala que el Sistema de Información de Casos del Ministerio Público (SICOMP) es utilizado para evaluar al personal de la institución.<sup>32</sup> Asimismo, durante la visita *in-situ*, los representantes del MP hicieron una presentación en *Power Point* sobre este sistema y la manera en el cual se utiliza, entre otras, para recibir retroalimentación del público sobre los servicios del MP, y para mejorar el desempeño del personal de la institución.<sup>33</sup>

[99] En un sentido similar, durante la visita *in-situ*, se presentó el “Proyecto de Ampliación de la Regionalización y Fortalecimiento de la Sede Central del la Supervisión General”, la cual es la unidad encargada del control interno con respecto al personal del MP.<sup>34</sup>

[100] El Artículo 81 de la LOMP crea la Unidad de Capacitación del MP y la responsabiliza, entre otros, de promover, ejecutar y organizar cursos de capacitación para el personal del Ministerio Público y para los aspirantes a cargos de la institución. Esta Unidad tiene su propio componente en el portal en Internet del MP, disponible en <http://unicap.mp.gob.gt/>, que contiene gran cantidad de información, incluyendo calendarios mensuales de las oportunidades de capacitación que ofrece la Unidad.

[101] En cuanto a la manera de informar al público sobre sus objetivos, funciones y procedimientos, entre otras, la respuesta al cuestionario explica que en cumplimiento de su Ley Orgánica, el MP publica un informe anual que contiene información sobre resultados, explicando los éxitos y dificultades en el cumplimiento de sus objetivos, así como un informe detallado sobre la ejecución del presupuesto.<sup>35</sup> Asimismo, la respuesta explica que el MP tiene una oficina de información responsable para orientar al público sobre las funciones del MP, y para cumplir con la Ley de Información Pública.<sup>36</sup>

[102] El MP también tiene un portal en Internet institucional, disponible en [www.mp.bog.gt.](http://www.mp.bog.gt/), el cual contiene, entre otras, información sobre los antecedentes, estructura y funciones del MP, su plan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pág. 51.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pág. 52.

<sup>33</sup> Esta presentación, denominado Ministerio Público Unidad de Evaluación del Desempeño, se encuentra disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

<sup>34</sup> Esta presentación se encuentra disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm).

<sup>35</sup> Ver la respuesta de Guatemala al Cuestionario para la Cuarta Ronda, Pág. 52, *supra* nota 11.

<sup>36</sup> *Ibid.*

estratégico, boletines de prensa, informes anuales, una sección de preguntas frecuentes y anuncios de vacantes.

[103] Con respecto a controles internos, el Artículo 41 del Acuerdo No. 12-2007, el Reglamento de organización y funcionamiento del área administrativa del Ministerio Público, crea la Unidad de Auditoría Interna y la responsabiliza de los controles internos en el MP, así como de llevar a cabo auditorías de las finanzas del MP.

[104] Con respecto al manejo de las quejas contra el personal del MP, el Artículo 39 del Acuerdo No. 12-2007 crea la Unidad de Supervisión General que, de acuerdo con la respuesta del país analizado, se encarga de los asuntos administrativos, incluyendo la recepción de este tipo de quejas. En la respuesta se observa también que estos tipos de quejas son investigadas por la Unidad de Asuntos Internos.<sup>37</sup>

[105] Con respecto a los mecanismos para la rendición de cuentas, el Artículo 16 de la LOMP requiere la publicación de una memoria anual para informar a los ciudadanos sobre el resultado de sus actividades, que deberán ser remitidas también al Presidente de la República y al Organismo Legislativo. El Artículo 16 requiere asimismo que esta memoria contenga: (1) un resumen del trabajo realizado en el ejercicio; (2) el análisis del servicio prestado, con detalle de los obstáculos y las medidas adoptadas para superarlos; (3) la recopilación de las instrucciones generales dictadas por el Fiscal General, así como las decisiones y recomendaciones del Consejo del MP; (4) el detalle de la ejecución del presupuesto; y (5) propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras necesarias. La respuesta del país analizado señala que el Departamento de Planificación del MP se encarga de la recopilación y el procesamiento de la información necesaria para la memoria anual del MP.<sup>38</sup> La respuesta también observa que el MP emite notas de prensa y realiza conferencias de prensa para difundir las acciones más importantes y que más recientemente ha utilizado las redes sociales para informar al público sobre sus actividades y tener una interlocución inmediata.

## **2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[106] El Ministerio Público cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[107] En primer lugar, durante el curso de la visita *in situ*, los representantes del Ministerio Público hablaron sobre un problema grave y continuo con la operación del Consejo del MP, pues desde 2010, el Consejo del Ministerio Público no se ha podido constituir. Explicaron que históricamente ha sido difícil cubrir a los tres miembros del Consejo que la LOMP requiere que nombre el Organismo Legislativo de entre los candidatos no seleccionados para el puesto de Fiscal General. Los representantes explicaron además que puesto que el cargo de miembro del Consejo no es de tiempo completo ni está bien remunerado, los anteriores candidatos a Fiscal General no han estado dispuestos a servir como miembros.

[108] Como se indicó arriba, en la sección 2.1, la LOMP establece un mecanismo de apelación para los funcionarios y empleados del MP con respecto a los cuales se ha emitido una resolución de acción

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Págs. 52-53.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pág. 54.

disciplinaria. Esta apelación se presenta ante el superior jerárquico o ante el Consejo del Ministerio Público cuando la sanción fue emitida por el Fiscal General.

[109] Los representantes del MP explicaron que el Consejo se ha reunido para llevar a cabo algunas de sus otras funciones estatutarias, como proponer candidatos para los distintos puestos de fiscales, con los miembros del Consejo que según el Artículo 19 de la LOMP se requiere elegir de la Asamblea General de fiscales del MP. Sin embargo, los representantes del MP explicaron que puesto que las apelaciones de acciones disciplinarias deben ser oídas por la totalidad del Consejo, esta importante función no puede llevarse a cabo.

[110] En consecuencia, no es posible ejecutar las sanciones respectivas que se han emitido. Durante la visita *in situ* se explicó además que las resoluciones que se han expedido, y que no pueden implementarse hasta agotar una apelación, se refieren tanto a sanciones menores resultantes de faltas menores como a violaciones graves cuya resolución determina suspensión o remoción.<sup>39</sup> Preocupa al Comité que no existe actualmente un mecanismo en funcionamiento que permita la ejecución de las sanciones disciplinarias emitidas por la Fiscalía General, y considera muy importante que el país analizado adopte las medidas necesarias para remediar esta situación a la brevedad posible. El Comité formulará una recomendación considerando esta circunstancia (ver recomendación 2.4.1 del capítulo II de este informe).

[111] En segundo lugar, con respecto a la función del Consejo que consiste en proponer candidatos para los distintos puestos de fiscales en todo el MP, el Comité observa que esta función ha sido cumplida por el Consejo, integrado por la Fiscalía General y los fiscales del MP que han sido nombrados por la Asamblea General del MP, sin incluir, no por culpa del MP, a los miembros del Consejo pendientes de nombramiento por la Legislatura, quienes podrían considerarse más independientes, es decir, que no están bajo el control directo de la Fiscalía General. Como resultado, todos los posibles candidatos para puestos de fiscal provienen del MP mismo, es decir, de la Fiscalía General y de los fiscales del MP. El Comité opina que este elemento también es indicativo de la necesidad de que se designen a todos los miembros del Consejo, para que ésta pueda ejecutar las funciones que le asigna la LOMP de manera adecuada e imparcial. El Comité formulará una recomendación al respecto. (ver recomendación 2.4.2 del capítulo II de este informe).

[112] En tercer lugar, y también con respecto a la información contenida el portal en Internet del MP, el Comité nota que el mismo contiene una gran cantidad de información útil. Sin embargo, el Comité observa que aunque el portal tiene un listado de las leyes básicas sobre la creación, organización y operación de la institución, no contiene enlaces a esos documentos, ni a los Acuerdos (reglamentos) emitidos por el Fiscal General.

[113] Asimismo, el Comité observa que el portal en Internet del MP incluye una página con información sobre el Consejo del MP. En este sentido, y a pesar de que de conformidad con la información suministrada por el MP solamente quedan por designar tres de sus miembros por parte de la Asamblea Legislativa, la página aparece en blanco con respecto a todos miembros del Consejo, dando la impresión que el Consejo no está operando, o que sus únicos miembros son el Fiscal General y el Secretario del Consejo.

[114] El Comité considera que sería útil e importante que el MP actualice su portal en Internet, a través de la inclusión de los nombres de los miembros del Consejo que ya han sido designados, y

---

<sup>39</sup> Véase la gráfica presentada por el Ministerio Público, en la sección 2.3 del presente informe.

también con los documentos básicos (leyes y reglamentos) de la institución. El Comité formulará una recomendación sobre tomando en cuenta estos puntos. (ver la recomendación 2.4.3 en el capítulo II de este informe.)

[115] En cuarto lugar, durante la visita *in situ*, los representantes del MP presentaron información relacionada con las dificultades que enfrenta la institución en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la corrupción. La primera se refiere al uso excesivo por los acusados en los procesos penales de los recursos que ofrece la Ley de Amparo como forma de demorar y obstruir las acciones judiciales. Por ejemplo, el personal del MP habló de casos en que se han presentado gran cantidad de mociones sin fondo con respecto a un solo caso. Los representantes del MP explicaron que para solucionar este problema sería necesario considerar cambios a la Ley de Amparo y a la LOMP. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.4 del capítulo II de este informe).

[116] También la Organización Myrna Mack habló de esta situación durante las reuniones con la sociedad civil en el marco de la visita *in situ* y sugirió asimismo que era necesario considerar alguna forma de limitar las mociones procesales, debido al hecho de que se están empleando para demorar los juicios.

[117] En quinto lugar, y también en lo que respecta a una dificultad que genera demoras en el enjuiciamiento de faltas relacionadas con corrupción, los representantes del MP señalaron que en muchos de estos procesos se requieren auditorías, que generalmente lleva a cabo la Contraloría General de Cuentas (CGC). Sin embargo, puesto que la CGC carece de personal suficiente para llevar a cabo oportunamente estas auditorías, el MP a menudo contrata auditores externos calificados para efectuar estas auditorías necesarias.<sup>40</sup> El problema que han enfrentado es que algunos jueces solamente aceptan auditorías realizadas por auditores de la CGC, independientemente del hecho de que aceptar solamente las auditorías de la CGC es asunto de práctica y no un requisito legal, según el personal del MP. Por lo tanto, opinaron que era necesaria la capacitación específica de los jueces en este sentido. Asimismo, señalaron la necesidad general de que haya jueces anticorrupción especialmente capacitados. El Comité formulará las recomendaciones pertinentes (ver recomendaciones 3.4.1 y 4.4.1 del capítulo II de este informe).

[118] En sexto lugar, durante la visita *in-situ* y como fue anteriormente mencionado en la sección 1.2, el Comité observa que varios factores podrían estar afectando la correcta implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Uno de esos factores, señalados por los representantes de la sociedad civil durante la visita *in-situ*, es que muchas veces los funcionarios públicos no tienen conocimiento de sus obligaciones conforme a la Ley. Asimismo, con respecto al Ministerio Público en particular, Acción Ciudadana notó haber presentado denuncias sobre acceso a la información al MP, pero que los funcionarios de la institución no estaban seguros de que unidad dentro de la institución tenía responsabilidad para la investigación y persecución de casos relacionados a la falta de cumplimiento con las disposiciones sobre acceso a la información. En este sentido, el Comité

---

<sup>40</sup> Con respecto a la posibilidad de contar con sus propios auditores, el Ministerio Público explicó que “*Al respecto es de suma importancia mencionar que el Ministerio Público a partir del acuerdo 7-2013, que crea la Dirección de Análisis Criminal, cuenta con un departamento de análisis financiero integrado por auditores, que se organiza para realizar investigaciones financieras en casos de corrupción, así como de otros delitos, a efecto de contar con el personal calificado para llevar a cabo las auditorías necesarias. Sin embargo aun persiste la dificultad que se enfrenta ya que algunos jueces solamente aceptan auditorías realizadas por auditores de la CGC, independientemente del hecho de que aceptar solamente las auditorías de la CGC es asunto de práctica y no un requisito legal.*”



considera que sería útil que el MP considerara la implementación de programas de capacitación para su personal sobre sus responsabilidades conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, en cuanto a la obligación legal de responder a solicitudes de información, y también en cuanto a la función del MP de investigar y procesar casos de falta de cumplimiento con la Ley. El Comité formulará una recomendación en este sentido. (ver la recomendación 2.4.5 en el capítulo II de este informe.)

### 2.3. Resultados del marco jurídico y otras medidas

[119] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ* se recabó información relativa a los resultados del Ministerio Público con respecto al cumplimiento de sus funciones, entre ellos los siguientes:

[120] En primer lugar, con respecto a las medidas relacionadas con la prevención de la corrupción, la respuesta al cuestionario informa sobre dos eventos realizados en 2011: un Seminario Regional sobre Ética y un taller titulado “Mejoras en Casos de Corrupción.”<sup>41</sup>

[121] Con respecto a lo anterior, el Comité también observa la respuesta del país analizado al cuestionario señala, como una de las dificultades que enfrenta el MP, “...la falta de capacitación permanente y generalizada a todas las áreas del MP por lo que se considera necesario que el Ministerio Público reciba capacitación en todas las áreas administrativas y fiscales.”<sup>42</sup>

[122] Al respecto, el Comité observa, como se dijo arriba, en la sección 2.1, que el sitio Web de la Unidad de Capacitación enumera gran cantidad de actividades de capacitación que la Unidad está organizando y llevando a cabo, en las que se abordan una variedad de temas y que se imparten a una gama de públicos, incluyendo fiscales, estudiantes y funcionarios de otras instituciones gubernamentales. No obstante, como lo señaló el país analizado, el Comité considera que aunque los cursos que ofrece la Unidad de Capacitación son inmensamente valiosos, se refieren a temas muy específicos y especializados. En este sentido, el Comité estima que podría ser útil que el MP, a través de su Unidad de Capacitación, organice un curso de capacitación integral y generalizado para todo el personal del MP, con respecto al cumplimiento adecuado de sus funciones, además de proporcionar capacitación adicional en ámbitos relativos a la prevención de la corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.6 del capítulo II de este informe).

[123] En segundo lugar, con respecto a los resultados de las funciones del MP relativas a la investigación y el enjuiciamiento penal de actos de corrupción en que están involucrados servidores públicos, durante la visita *in situ*, los representantes del MP suministraron estadísticas de la Fiscalía Contra la Corrupción que indican que: (1) de enero a diciembre de 2012 hubo un total de 25 personas condenadas y además hubo otras 17 personas que fueron ligadas a proceso penal por delitos de corrupción; y (2) de enero a marzo de 2013 hubo 30 personas condenadas y además hubieron otras 9 personas ligadas a proceso penal por delitos de corrupción.

Año	Personas condenadas por delitos de corrupción	Personas ligadas a proceso penal por casos de corrupción (a la espera de juicio)
Enero a diciembre 2012	25	17

<sup>41</sup> Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario, pág. 70, *supra* nota 11.

<sup>42</sup> *Ibid.*, pág. 72.

Enero a marzo 2013	30	9
--------------------	----	---

[124] El Comité observa asimismo que los Informes Anuales publicados por el Ministerio Público y disponibles en su portal en Internet suministran estadísticas sobre los resultados obtenidos por la Fiscalía Contra la Corrupción,<sup>43</sup> incluyendo, entre otras cosas, información sobre el número de casos recibidos, resueltos, desestimados, suspendidos, archivados y transferidos, así como sobre el número de personas declaradas culpables.

[125] El Comité estima que estos resultados e información indican que la Fiscalía Contra la Corrupción está logrando resultados en lo que respecta al enjuiciamiento penal de actos de corrupción. No obstante, el Comité observa que no hay resultados disponibles que indiquen cuántos casos han prescrito por no haberse completado dentro de los plazos estatutarios, ni sobre los tipos de actos de corrupción a que se refiere cada caso. El Comité estima que mantener resultados al respecto ayudaría al Ministerio Público a determinar si se deben implementar esfuerzos adicionales, ya sea en lo que respecta a agilizar los procesos para evitar su prescripción o a aumentar las actividades de prevención en ciertos ámbitos en los que son más prevalentes los actos de corrupción. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.7 del capítulo II de este informe).

[126] En tercer lugar, con respecto a la investigación y sanción administrativa de los empleados y funcionarios del Ministerio Público, la respuesta del país analizado al cuestionario señala que en los últimos cinco años se trasladaron 718 solicitudes de resolución disciplinaria al Fiscal General, de los cuales 541 resultaron en la imposición de sanciones. Asimismo, la respuesta indica que en los últimos cinco años, se trasladaron 384 solicitudes a fiscales de distrito y de sección y demás jefes de dependencia. De ellos, 277 resultaron en imputación de responsabilidad. La respuesta señala además que 217 resoluciones disciplinarias resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución y hubo 15 resoluciones de archivo.

[127] Con respecto a los resultados anteriores, el Comité observa que indican que aproximadamente el 75% de las solicitudes de acción disciplinaria presentadas ante la Fiscalía General resultan en imputación de responsabilidad y aproximadamente el 72% de este tipo de solicitudes presentadas ante otros superiores resultan en imputación de responsabilidad. Aunque estas estadísticas indican un alto porcentaje de imputaciones de responsabilidad, el Comité observa que estas cifras se refieren a casos que ya han sido investigados y posteriormente se trasladaron a la autoridad correspondiente del Ministerio Público para su decisión con respecto a sanciones. Sin embargo, el Comité observa una ausencia de información que indique cuántos servidores públicos fueron investigados en general y cómo las investigaciones condujeron a no imputación de responsabilidad o se concluyeron de alguna otra manera. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.8 del capítulo II de este informe).

[128] En cuarto lugar, y también con respecto a la disciplina del personal del MP, la presentación de los representantes del MP durante la visita *in situ* incluye la siguiente tabla, que muestra las sanciones impuestas por la Fiscalía General en 2011 y 2012:

---

<sup>43</sup> Los Informes Anuales publicados por el Ministerio Público se encuentran disponibles aquí: <http://www.mp.gob.gt/acerca-del-mp/en-construccion/>

Sanciones	Número	Apelaciones que tienen que ser oídas por el Consejo del MP
Remoción	86	65
Suspensión	63	38
Amonestación escrita	33	15
Amonestación verbal	8	5
TOTAL	190	123

[129] Como se dijo arriba, en la sección 2.2, preocupa al Comité la ausencia de aplicación de las decisiones disciplinarias adoptadas en el MP y, particularmente, el hecho de que a partir de la información anterior, por lo menos 65 miembros del personal de la institución supuestamente han cometido infracciones lo suficientemente serias para justificar su remoción, pero están ejerciendo todavía sus funciones. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 2.4.1 del capítulo II de este informe).

#### **2.4. Conclusiones y recomendaciones**

[130] Con base en el análisis integral realizado con respecto al el Ministerio Público en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[131] Guatemala ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer el Ministerio Público como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.**

[132] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Tomar las medidas necesarias para que las decisiones disciplinarias adoptadas con respecto al personal del Ministerio Público puedan ser ejecutadas de manera oportuna (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Tomar las medidas necesarias para el nombramiento oportuno de todos los miembros legalmente requeridos del Consejo del Ministerio Público (MP), de modo que éste pueda plena y efectivamente llevar a cabo las funciones que le asigna la Ley Orgánica del Ministerio Público, incluyendo, entre otras, la propuesta de candidatos para cargos fiscales del MP al Fiscal General. (Véase capítulo II, sección 2.2 de este informe.)
- 2.4.3. Actualizar y mantener actualizada la información en el portal en Internet del Ministerio Público, de tal manera que se incluya la información sobre los miembros del Consejo del Ministerio Público que han sido nombrados (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Adoptar las medidas correctivas pertinentes, ya sea reformando la Ley de Amparo y/u otras disposiciones pertinentes, o a través de las medidas que se estimen necesarios, a fin de eliminar circunstancias que paralicen o retarden el proceso penal. (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).

- 2.4.5. Emitir la reglamentación o los documentos necesarios para asignarle expresamente a una unidad dentro del Ministerio Público la responsabilidad de investigar y procesar los casos que involucran una falta de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública; e implementar un programa de capacitación sobre esta Ley para el personal del Ministerio, que cubra tanto la obligación del Ministerio Público para responder a solicitudes de información, como sobre su función de investigar y procesar el supuesto incumplimiento con las disposiciones de la Ley. (ver sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.6. Organizar e implementar, a través de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, un curso de capacitación integral y generalizado para todo el personal del MP, con respecto al cumplimiento adecuado de sus funciones, y proporcionar capacitación adicional en ámbitos relativos a la prevención de la corrupción (ver sección 2.3 del capítulo II de este informe).
- 2.4.7. Mantener resultados que detallen los tipos de delitos de corrupción que se procesan, así como el número de casos penales que han prescrito por no haberse completado dentro de los plazos estatutarios, a fin de identificar desafíos y adoptar medidas correctivas, como la necesidad de agilizar los procesos o aumentar las actividades de prevención en ciertos ámbitos (ver sección 2.3 del capítulo II de este informe).
- 2.4.8. Mantener resultados sobre la disciplina del personal del Ministerio Público, que indiquen el número de casos investigados y cuántas investigaciones resultaron en no imputación de responsabilidad, a fin de identificar desafíos y adoptar medidas correctivas (ver sección 2.3 del capítulo II de este informe).

### **3. CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**

#### **3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[133] La Contraloría General de Cuentas cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[134] Con respecto a sus objetivos, el artículo 3 del Decreto No. 31 de 2002, la Ley Orgánica de la Contraloría General, establece que la CGC es responsable, entre otros de: (a) determinar si la gestión institucional de los entes sujetos a su fiscalización se realiza bajo criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad; (b) apoyar el diseño e implantación de mecanismos de participación ciudadana para el fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública; (c) promover y vigilar la responsabilidad de los servidores públicos; (d) llevar a cabo auditorías y emitir recomendaciones para la actualización, modernización y mantenimiento de los sistemas; (e) promover procesos de capacitación para funcionarios públicos responsables de la administración, ejecución o supervisión del patrimonio hacendario del Estado; (h) velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública; e (i) promover y vigilar la calidad del gasto público.

[135] En lo que respecta a sus funciones, el artículo 4 de la Ley Orgánica de la CGC establece, entre otras cosas, que las atribuciones de la CGC incluyen, entre otras, ser responsable del control gubernamental, y que las instituciones y personas sujetas a dicho control están obligadas a cumplir

con las disposiciones o decisiones que dicte en el ámbito de su competencia (artículo 4(a)); efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras-administrativas a través de auditorías y emitir informes de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental vigentes (artículo 4(b)); normar el control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna y proponer medidas para mejorar su eficiencia y eficacia (artículo 4(c)); evaluar los resultados de la gestión de las instituciones sujetas a su control bajo los criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad (artículo 4(d)); auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros y de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y los de las entidades autónomas y descentralizadas (artículo 4(e)); promover de oficio y ser parte actora de los Juicios de Cuentas en contra de los funcionarios y empleados públicos (artículo 4(f)); requerir la suspensión inmediata de funcionarios o empleados públicos cuando se hubieren detectado hechos presuntamente constitutivos de delito y denunciarlos ante las autoridades competentes (artículo 4(g)); nombrar interventores de carácter temporal en las entidades sujetas a su control cuando se compruebe que se está comprometiendo su estabilidad económica-financiera (artículo 4(h)); cuando las circunstancias lo demanden y, de manera exclusiva, contratar contadores públicos y auditores independientes para realizar auditorías en las instituciones y personas sujetas a su control (artículo 4(l)); promover mecanismos de lucha contra la corrupción (artículo 4(n)); verificar la veracidad de la información contenida en las declaraciones de probidad presentadas por los funcionarios y empleados públicos (artículo 4(o)); y coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos en contra de la hacienda pública (artículo 4(t)).

[136] El artículo 232 de la Constitución establece que la CGC es una institución técnica descentralizada, mientras que el artículo 1 de la Ley Orgánica de la CGC dispone que goza de independencia funcional, técnica y administrativa. Asimismo, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la CGC especifica que tiene competencia en todo el territorio nacional.

[137] Con respecto al alcance de sus funciones, el artículo 2 de su Ley Orgánica establece que la CGC lleva a cabo fiscalización externa con respecto a los Organismos del Estado, las entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, y demás instituciones que conforman el sector público no financiero, así como las instituciones no financieras en que participe el Estado o en que estén involucrados fondos del Estado.

[138] El artículo 2 de la Ley Orgánica de la CGC también establece una excepción al alcance de las funciones de la CGC según la cual las entidades del sector público sujetas a otras instancias fiscalizadoras no se sujetan a la fiscalización de la CGC. Durante el curso de la visita *in situ*, los representantes de la CGC explicaron que estas disposiciones se refieren a las instituciones que forman parte del sector financiero y bancario, que están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.

[139] En lo que toca a la existencia de funciones compartidas con otros órganos de control superior, la respuesta del país analizado observa que de conformidad con el artículo 232 de la Constitución y el artículo 1 de su Ley Orgánica, como institución técnica y descentralizada, la función fiscalizadora de la CGC es exclusiva y no depende de ninguna otra institución del Estado para el desarrollo de sus funciones.<sup>44</sup>

[140] Asimismo, la respuesta del país analizado al cuestionario observa que *“En cuanto a los mecanismos para la solución de eventuales conflictos de competencia, el ordenamiento jurídico*

---

<sup>44</sup> Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 14, *supra* nota 11.

*administrativo le otorga a Contraloría General de Cuentas, el monopolio de la fiscalización de activos y pasivos del Estado, por lo que no existe otro órgano con la misma competencia funcional.*<sup>45</sup>

[141] Con respecto a los mecanismos de coordinación de sus funciones con las de otros órganos de control superior, en marzo de 2013, la CGC firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre la Vicepresidencia de la República, el Organismo Judicial, el Ministerio Público, y la Procuraduría General, a fin de establecer mecanismos generales de cooperación, canales de coordinación y líneas de acción interinstitucionales para combatir la corrupción.

[142] Asimismo, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGC también señalaron que para el cumplimiento de sus funciones, la CGC también ha firmado convenios de cooperación con la Oficina de Gobierno de Puerto Rico, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, el Ministerio Público, la Contraloría de Panamá, la Superintendencia de Administración Tributaria y diversas universidades.<sup>46</sup>

[143] Como una forma adicional para obtener el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones, el artículo 7 de la Ley Orgánica de CGC dispone que la CGC, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier fuente de información de las entidades y personas sujetas a su fiscalización.

[144] Con respecto a la toma de decisiones en la CGC, la respuesta del país analizado observa que *“Las decisiones de la Contraloría se establecen mediante un orden jerárquico, que parte desde la cúpula institucional integrada por: Contralor General de Cuentas, Subcontralor de Probidad, Subcontralor del Gasto Público y Directores, que ejercen decisiones en el ámbito específico de su competencia. No existen instancias múltiples ya que Contraloría General de Cuentas es una institución descentralizada con independencia funcional, cuyas decisiones o resoluciones son de carácter unipersonal.*”<sup>47</sup>

[145] De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica de la CGC, contra las resoluciones que dicte el Contralor general de Cuentas procede el recurso de reposición,<sup>48</sup> y contra las resoluciones que dicten los Subcontralores, Directores y Jefes de dependencias de la Contraloría general de Cuentas procede el recurso de revocatoria.<sup>49, 50</sup>

[146] Con respecto a la elección del Contralor General, el artículo 233 de la Constitución establece que el Contralor General será electo por el Congreso de la República para un período de cuatro años. Este artículo prevé además que el Contralor General sólo podrá ser removido por el Congreso en los

---

<sup>45</sup> *Ibíd.*, pág. 15.

<sup>46</sup> *Ibíd.*, pág. 21.

<sup>47</sup> *Ibíd.*, pág. 16.

<sup>48</sup> Véase también el artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que prevé en su parte pertinente, con respecto al recurso de reposición, que *“Contra las resoluciones dictadas por los ministerios y, contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida.”*

<sup>49</sup> Véase también el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que dispone lo siguiente con respecto al recurso de revocatoria: *“Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, en memorial dirigido al órgano administrativo que la hubiere dictado.”*

<sup>50</sup> Adicional a los dos recursos indicados, existe la posibilidad de solicitar una acción Constitucional de amparo.

casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. El mismo artículo dispone que el Contralor no podrá ser reelecto. El artículo 234 de la Constitución contiene los requisitos para el nombramiento del Contralor General, mientras que el artículo 235 le otorga al Contralor la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la CGC y de nombrar interventores en los asuntos de competencia, conforme a la Ley de Servicio Civil.

[147] De acuerdo con la respuesta al cuestionario, el personal de la Contraloría General se selecciona con base en el Reglamento del Plan de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios, creado a través del Acuerdo Gubernativo No. 235-2008 y modificado posteriormente mediante el Acuerdo Gubernativo No. 462-2011. El artículo 5 de dicho Reglamento clasifica los puestos como de confianza —que corresponden a los puestos de Subcontralor, Asesores, Director General, Directores y Jefaturas de Departamentos (artículo 5(a))— y personal de carrera administrativa (artículo 5(b)). Este Reglamento prevé los procedimientos para la creación y supresión de puestos.

[148] Con respecto a la contratación del personal, la respuesta señala que *“El personal de libre nombramiento y remoción corresponde a la serie de alto nivel que corresponde a los puestos de Sub Contralor y Director; el resto de cargos es nombrado por medio de un proceso de reclutamiento, selección contratación e inducción.”*<sup>51</sup> En este sentido, el artículo 13(c) de la Ley Orgánica de la CGC establece que la Contraloría General de Cuentas tiene que nombrar y remover a los empleados de la institución conforme a la Ley de Servicio Civil.

[149] Adicionalmente, durante el curso de la visita *in situ*, los representantes de la CGC suministraron copias del Acuerdo No. A-159-2008, expedido por el Contralor General, que establece el Código de Ética para los Empleados de la CGC. Asimismo, el personal de la CGC también está sujeto a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, cuyos artículos 8, 9 y 10, establecen la responsabilidad administrativa, civil y penal por infracciones administrativas, faltas civiles y acciones delictivas, respectivamente. Esta ley también contiene disposiciones relacionadas con incompatibilidades para cargos en el servicio público (artículo 16), y prohibiciones aplicables a los servidores públicos (artículos 18 y 19).

[150] Con respecto a la disciplina del personal de la CGC, la respuesta al cuestionario observa que esta relación se rige por el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre dos organizaciones sindicales y la CGC.<sup>52</sup>

[151] La capacitación para el personal de la CGC es impartida por el Centro de Profesionalización Gubernamental (CEPROG), una dependencia de la CGC que, según el Reglamento de la Ley Orgánica de la CGC, es responsable de la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación de los procesos de capacitación interna y externa de la CGC (artículo 32). Durante el curso de la visita *in situ*, los representantes de la CGC suministraron copias de gran cantidad de boletines de prensa en los que se anuncian y resumen múltiples actividades de capacitación durante 2012 y 2013, sobre una amplia variedad de temas, incluidos los relativos a la transparencia y al combate a la corrupción.

[152] Con respecto a manuales que describan las funciones de su personal, además del Reglamento del Plan de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios, la CGC tiene un Manual de Categorías de Puestos Descriptivas y Específicas.

---

<sup>51</sup> Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 17, *supra* nota 9.

<sup>52</sup> *Ibid.*

[153] Con respecto a la existencia de procedimientos documentados o guías para el desarrollo de las tareas, la respuesta al cuestionario observa que el punto 1.10 de la Norma General de Control Interno de la Contraloría General de Cuentas requiere que la máxima autoridad de cada ente público elabore un manual de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.

[154] Con respecto a los controles internos y mecanismos para el procesamiento de quejas, la CGC cuenta con la Dirección de Inspección General, creada en virtud del artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de la CGC, que es responsable de ejercer el control de la calidad del trabajo del personal de la CGC y de las firmas de auditoría contratadas. Entre sus funciones, el Reglamento especifica que esta unidad está a cargo, entre otras cosas, de diseñar los criterios para calificar las denuncias (artículo 21(d)); recibir, investigar y pronunciarse sobre las denuncias internas y externas sobre el personal de la Contraloría (artículo 21(e)); realizar revisiones de los trabajos realizados por los auditores y personal de la Contraloría, como producto de indicios o denuncias sobre actos de corrupción (artículo 21(f)); coordinar acciones de investigación con los otros entes de control y los entes auditados, para una mejor orientación de los esfuerzos de investigación (artículo 21(g)); y valorar el cumplimiento de las normas internas e investigar cualquier violación a las mismas, recomendando las acciones pertinentes (artículo 21(h)).

[155] La CGC dispone también de una Dirección de Auditoría Interna (artículo 11 de la Ley Orgánica de la CGC), encargada de evaluar permanentemente los sistemas y procedimientos de la CGC (artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de la CGC).

[156] Con respecto al fortalecimiento institucional y el uso de tecnologías modernas para apoyar su trabajo, durante el curso de la visita *in situ*, los representantes de la CGC presentaron información sobre algunos de los sistemas de información que utiliza la CGC, que incluyen el sistema de probidad, el sistema de notificaciones electrónicas, el sistema de contabilidad electrónica, el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN Web) y el Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG).

[157] Para informar a la ciudadanía sobre sus objetivos y funciones, la CGC tiene un portal institucional en Internet, disponible en <http://www.contraloria.gob.gt/>. Como se indica en la respuesta al cuestionario, este portal contiene información relacionada con las funciones, misión, visión, políticas, estrategias, informes de auditorías, legislación, reglamentos, acuerdos internos y manuales.<sup>53</sup>

[158] En cuanto a asegurar los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, el artículo 34 de su Ley Orgánica establece que la CGC formulará y remitirá su presupuesto al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República y que dicho presupuesto deberá ser incrementado de acuerdo con las necesidades reales de la institución y conforme a las disponibilidades financieras del Estado, mientras que el artículo 35 dispone que la CGC es responsable de administrar, ejecutar y controlar los fondos contemplados en su presupuesto.

[159] Durante el curso de la visita *in situ*, los representantes de la CGC explicaron que diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la CGC requieren la rendición pública de cuentas, como el artículo 9, que exige la publicación periódica de la nómina de las entidades que fueron examinadas durante el período respectivo; los artículos 17 y 21, que requieren que el Subcontralor de Calidad de

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, pág. 19.



Gasto Público y el Subcontralor de Probidad, respectivamente, rindan informes por lo menos dos veces al año al Contralor y al Congreso sobre todas las evaluaciones, análisis, estudios, investigaciones, propuestas y resoluciones emitidas; y el artículo 25, que requiere que el Contralor rinda informes Congreso por lo menos dos veces al año. Adicionalmente, este artículo requiere que el Contralor presente un informe anual al Congreso en relación con todas las auditorías practicadas a los estados financieros y a la ejecución presupuestaria de las instituciones del Estado y entidades autónomas y descentralizadas. Por último, el artículo 36 requiere que la CGC remita anualmente una memoria de labores al Congreso.

### **3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[160] La CGC cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[161] En primer lugar, en relación con las dificultades en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGC explicaron que una de las principales dificultades que enfrenta la institución es la falta de recursos, tanto en lo que respecta a personal como a recursos físicos (vehículos, computadoras y software), que le permitan cumplir sus funciones más adecuadamente. En este sentido, la respuesta del país analizado al cuestionario observa que la escasez de personal no permite evaluar a las instituciones debidamente. La respuesta añade que la CGC cuenta aproximadamente con 700 auditores, pero que son responsables de las evaluaciones de más de 300 municipalidades, además de las dependencias de los Organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo e instituciones descentralizadas, autónomas y semiautónomas.<sup>54</sup>

[162] Además de que posiblemente esté dificultando la labor de la CGC relacionada con la investigación y sanción de actos de corrupción, el Comité observa que la escasez de personal en la CGC, y de auditores en particular, parecería estar teniendo un impacto adverso en el trabajo del Ministerio Público, en el sentido de que para evitar demoras en el procesamiento de casos de corrupción, esa institución ha tenido que recurrir a la contratación de auditores externos (no de la CGC) para realizar auditorías, las que algunas veces no son aceptadas por los jueces encargados del caso correspondiente. El Comité considera que es imperativo que la CGC disponga de personal calificado suficiente para cumplir sus diversas responsabilidades de auditoría, incluyendo las auditorías y evaluaciones que específicamente requiere su Ley Orgánica, así como las auditorías que son necesarias para el procesamiento, por parte del Ministerio Público, de casos de corrupción. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta estos factores (ver recomendación 3.4.1 del capítulo II de este informe).

[163] En segundo lugar, y también con respecto a las dificultades que enfrenta la CGC, durante la visita *in situ*, los representantes de la CGC explicaron que en años recientes la tendencia ha sido que una cantidad significativa de recursos públicos se han manejado y administrado a través de fideicomisos. No obstante, explicaron los representantes, la CGC tiene facultades limitadas para fiscalizar fideicomisos de esta naturaleza. Por lo tanto, los representantes señalaron que se requieren reformas legales para corregir esta situación. Esta situación se explica sucintamente en un Resumen Ejecutivo de mayo de 2013 expedido por la CGC, con respecto a las auditorías de fideicomisos realizadas por la CGC durante el ejercicio fiscal 2012, que señalan, en su parte pertinente, que “La

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, pág. 72.

*definición de fideicomiso del Estado es única puesto que tanto la legislación comercial como las disposiciones de derecho administrativo público son aplicables a ellos. De ahí las complicaciones contables para la fiscalización de estos fideicomisos, situación que requiere un estudio específico para determinar si su definición debe revocarse o si debe promoverse la aprobación de una ley que rija los fideicomisos públicos.*”<sup>55</sup> El Comité formulará una recomendación en vista de la circunstancia descrita (ver recomendación 3.4.2 del capítulo II de este informe).

[164] En relación con lo anterior, durante la visita *in situ*, los representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) señalaron un uso cada vez mayor de fideicomisos privados para financiar servicios gubernamentales básicos y, como resultado, sugirieron que se consideren modificaciones a las leyes relacionadas con los fideicomisos.

[165] En tercer lugar, y con respecto a los mecanismos para la contratación de los miembros del personal de la CGC, el Comité observa que prácticamente no se dispone de información en este sentido en el portal en Internet de la institución. Por ejemplo, este portal de la CGC incluye una pestaña titulada “Reclutamiento de Recursos Humanos”. Sin embargo, esta pestaña solamente envía a un enlace a una dirección electrónica a través de la cual se puede solicitar información sobre reclutamiento. El Comité estima que en interés de la transparencia y la rendición de cuentas, sería importante que la CGC se asegurara de que la información sobre la contratación en la institución esté disponible fácilmente en su portal en Internet, y que cualquier vacante disponible que surja se publique igualmente en el portal en Internet. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 3.4.3 del capítulo II de este informe).

[166] En cuarto lugar, con respecto a la recepción y el manejo de quejas en la CGC relacionadas, entre otros a actos de corrupción o mala administración financiera, el Comité observa que el portal en Internet de la CGC contiene una página de “quejas” que ofrece información sobre sitios para presentar quejas, además de acceso a un formulario para quejas que puede bajarse del sitio. El Comité observa con respecto al procedimiento para presentar quejas, que de acuerdo con la información disponible en línea, las quejas deben presentarse en persona, ya sea en las oficinas centrales de la CGC, o en una de sus distintas oficinas departamentales. Al Comité observa asimismo que el portal en Internet señala específicamente que no se aceptarán denuncias anónimas. El Comité considera que sería útil que la CGC contemplara adoptar ciertas medidas para fomentar y facilitar la presentación de quejas, y formulará una recomendación en este sentido (ver recomendación 3.4.4 del capítulo II de este informe).

[167] Con respecto a la situación anterior, en el marco de la visita *in situ*, la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana señaló que apenas recientemente la CGC dejó de aceptar denuncias anónimas y añadió que, en su opinión, esta prohibición, aunada a la historia de violencia en el país, tiende a inhibir las quejas.

[168] En quinto lugar, y con respecto a la capacitación que imparte la CGC, el Comité observa que el Centro de Profesionalización Gubernamental (CEPROG) ofrece una variedad de actividades de capacitación pertinentes y valiosas disponibles para los servidores públicos y para el público en general. Estas actividades cubren ámbitos como la recién promulgada Ley contra la Corrupción, el sistema de declaraciones de probidad, la Ley de Probidad y otros temas relacionados con el combate a la corrupción y la transparencia. No obstante, el Comité observa que el calendario de cursos de

---

<sup>55</sup> Este informe está disponible en:

[http://www.contraloria.gob.gt/i\\_docs/FIDE\\_012/archivos/informe/informe.pdf](http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/FIDE_012/archivos/informe/informe.pdf)

capacitación disponible en el portal en Internet no se ha actualizado en varios meses. El Comité considera que a fin de asegurar que los servidores públicos y miembros del público en general se enteren de estos tipos de oportunidades de capacitación, deberían emprenderse esfuerzos adicionales para asegurar que tales oportunidades se difundan ampliamente, por ejemplo, publicando con anticipación información relacionada con estos y otros eventos, y manteniendo permanentemente actualizado el calendario de capacitaciones del CEPROG. El Comité formulará una recomendación sobre este punto (ver recomendación 3.4.5 del capítulo II de este informe).

[169] En este sentido, durante la visita *in situ*, los representantes de Acción Ciudadana consideraron que no hay una difusión adecuada de los procesos y sistemas de la CGC, y que el público a menudo no sabe de su existencia.

[170] En sexto lugar, en relación con la existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, el Comité observa que la Norma General de Control Interno expedida por la CGC requiere que cada entidad pública elabore un manual de funciones y procedimientos para cada puesto con respecto a las diferentes actividades de dicha entidad. Sin embargo, aunque el Comité ha observado la existencia de un Manual de Categorías de Puestos Descriptivas y Específicas para la CGC, no se ha observado un manual que detalle los procedimientos o lineamientos para el personal de la CGC. El Comité formulará una recomendación sobre este punto (ver recomendación 3.4.6 del capítulo II de este informe).

### **3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[171] La respuesta al cuestionario del país y la visita *in situ* produjeron información sobre los resultados obtenidos por la CGC en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:

[172] En primer lugar, y con respecto a los resultados de las actividades de la CGC relacionadas con la prevención de actos de corrupción, la respuesta al cuestionario observa que en 2009, la CGC implementó un programa de capacitación<sup>56</sup> y de lucha contra la corrupción denominado “Jornadas de Fiscalización y Participación Ciudadana” para promover los procesos de transparencia en la gestión pública.<sup>57</sup> Este programa constó de 15 reuniones diferentes que se llevaron a cabo en los distintos departamentos de Guatemala en 2009 y 2010 y a las cuales asistieron casi 10.000 personas.

[173] También en relación con la prevención, la respuesta observa además que en 2011, la CGC emprendió la campaña “Yo me declaro Transparente”, para alentar a los empleados y funcionarios públicos a actualizar su declaración de probidad como lo requiere la ley.<sup>58</sup>

[174] En segundo lugar, con respecto a las funciones de la CGC relativas a la investigación y detección de actos de corrupción del personal de la CGC, la respuesta al cuestionario observa que en 2010, la CGC creó la Unidad de Gestión de Denuncias Ciudadanas, así como un sistema electrónico para su control y seguimiento, denominado SIGMA 7.<sup>59</sup> Además, la respuesta incluye el siguiente cuadro, titulado “Denuncias contra empleados de la Contraloría General de Cuentas durante los últimos cinco años”:

---

<sup>56</sup> Se hace una programación de capacitación de acuerdo a las necesidades que oportunamente vayan surgiendo.

<sup>57</sup> Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 57, *supra* nota 9.

<sup>58</sup> *Ibid.*, pág. 59.

<sup>59</sup> *Ibid.*, pág. 60.

Denuncias	Total	2007	2008	2009	2010	2011
Atendidas	20	3	5	3	2	7
Desestimadas	5	1	0	0	3	1
Totales	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

[175] Con respecto a las cifras del cuadro anterior, el Comité considera que 25 denuncias en un período de cinco años parece ser más bien bajo, particularmente porque la CGC es una de las instituciones públicas más grandes en el país analizado. En este sentido, el Comité observa, como se discutió arriba en la sección 3.2, que las denuncias solamente pueden entregársele a la CGC en persona y que, además, no es posible enviarlas de manera anónima. El Comité estima que sería útil para el país analizado, además de las medidas que se recomendaron ya en la sección 3.2 para hacer frente a este asunto, contemplar estudiar si podría haber otros factores que estén contribuyendo al bajo número de denuncias recibidas por la CGC y, a partir de los resultados de ese estudio, adoptar las medidas correctivas adicionales que se consideren pertinentes (ver recomendación 3.4.7 del capítulo II de este informe).

[176] En tercer lugar, con respecto a la sanción administrativa de infracciones que dan como resultado sanciones civiles, la memoria anual de 2012 de la CGC observa que en 2012 se impusieron 8.826 sanciones económicas a funcionarios y empleados públicos por incumplimiento de la legislación aplicable.<sup>60</sup> En total estas sanciones ascendieron a 7.564.862,62 quetzales. Con respecto a estas cifras, el Comité observa que la memoria anual incluye también un cuadro que muestra el porcentaje de sanciones asociadas con cada ley infringida, incluyendo la Ley Orgánica de la CGC, la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley del Tribunal de Cuentas y la Ley Orgánica de Presupuesto. No obstante, el Comité observa la ausencia de información que indique cuántas de estas sanciones económicas se aplicaron debido a actos de corrupción, y considera que sería útil disponer de esta información para determinar ámbitos que podrían requerir mayor atención. El Comité formulará una recomendación sobre este punto (ver recomendación 3.4.8 del capítulo II de este informe).

[177] Con respecto a la detección de actos de corrupción, la memoria anual de 2012 de la CGC señala que en 2012 la CGC presentó 297 denuncias penales ante el Ministerio Público.

[178] El Comité considera que los resultados anteriores demuestran que la CGC llevó a cabo un número muy grande de auditorías de diversas instituciones del Estado en el país analizado, y que con frecuencia se imponen y cobran sanciones monetarias como resultado de las conclusiones de estas auditorías. Asimismo, el Comité observa también que las conclusiones de las auditorías han dado como resultado que se presenten casos ante el Organismo Judicial para su enjuiciamiento penal. El Comité observa adicionalmente que los resultados suministrados indican cuáles leyes se han

---

<sup>60</sup> Véase la memoria anual de 2012 de la CGC, pág. 31, disponible en: [http://www.contraloria.gob.gt/i\\_docs/i\\_mem\\_012.pdf](http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_mem_012.pdf).

infringido con mayor frecuencia, y el Comité considera esta información valiosa para determinar los ámbitos en que se podría requerir atención adicional.

[179] No obstante, el Comité observa la falta de resultados que indiquen tanto a nivel administrativo como penal, el tipo de falta administrativa o delito penal que ha dado como resultado la aplicación de sanciones económicas o, según corresponda, la presentación de denuncias penales ante el Organismo Judicial.<sup>61</sup>

[180] En cuarto lugar, con respecto a los resultados de la investigación de actos de corrupción que generarían responsabilidad penal, la memoria anual de 2012 de la CGC observa que en 2012 hubo 566 acciones legales en proceso promovidas por la CGC ante el Ministerio Público o en el juzgado correspondiente en la investigación de los delitos cometidos en contra de la hacienda pública,<sup>62</sup> de las cuales 297 fueron presentadas ante el Ministerio Público. Asimismo, la memoria anual de 2011 señala que en 2011 se presentaron 96 casos penales ante el Ministerio Público para su procesamiento.

[181] El Comité observa que los resultados anteriores no indican el número total de investigaciones emprendidas en relación con actos de corrupción; el número de investigaciones en las que se concluyó que no hubo irregularidad; cuántas fueron suspendidas; cuántas prescribieron por no haberse concluido dentro del plazo establecido; cuántas se archivaron sin haberse tomado una decisión con respecto al fondo; ni cuántas se encontraban en una situación que permitiera tomar una decisión con respecto al fondo.

[182] En el mismo orden de ideas, el Comité observa que las memorias anuales no presentan información sobre los resultados de los casos presentados ante el Ministerio Público o los tribunales correspondientes para su procesamiento, ni hay indicación de que se efectúe un seguimiento de estos casos. El Comité formulará recomendaciones tomando en cuenta estas consideraciones (ver recomendaciones 3.4.9. y 3.4.10. del capítulo II de este informe).

[183] En quinto lugar, el Comité observa que la CGC publica un informe sobre los resultados de las entidades que se han auditado. Estos informes están disponibles en el portal de la CGC en Internet. Durante la visita *in situ*, los representantes de la CGC suministraron versiones electrónicas correspondientes a 2011. Sin embargo, el Comité observa que solamente están disponibles en línea los informes de esta naturaleza hasta 2010. El Comité considera que para asegurar la divulgación adecuada de los resultados de las auditorías efectuadas por la CGC, este informe debería seguirse publicando en su portal en Internet, y formulará una recomendación en este sentido (ver recomendación 3.4.11 del capítulo II de este informe).

### **3.4. Conclusiones y recomendaciones**

[184] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la CGC en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[185] Guatemala ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer la Contraloría General de Cuentas como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.**

---

<sup>61</sup> El Artículo 39 del Decreto 31-2012 del Congreso de la República, la Ley Orgánica de la CGC, establece el procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas.

<sup>62</sup> Ver la memoria anual de 2012 de la CGC, disponible en:

[http://www.contraloria.gob.gt/i\\_docs/i\\_mem\\_012.pdf](http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_mem_012.pdf).

[186] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 3.4.1. Dotar a la Contraloría General de Cuentas de recursos humanos y financieros suficientes, incluyendo auditores, dentro de los recursos disponibles, de tal manera que pueda cumplir plena y adecuadamente sus funciones, particularmente las relativas a las auditorías y evaluaciones que requiere su Ley Orgánica, así como a las auditorías que requieren otros órganos de control superior para el procesamiento de casos o investigaciones de corrupción (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.2. Adoptar las medidas necesarias, incluyendo considerar si son necesarias reformas legales, para asegurar que los fideicomisos que contienen fondos públicos o que se emplean para financiar servicios o proyectos gubernamentales se sujeten a fiscalización adecuada por parte de la Contraloría General de Cuentas (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.3. Publicar información sobre el reclutamiento de recursos humanos en la Contraloría General de Cuentas en el portal en Internet de la institución, como información sobre las vacantes de personal que no sea de confianza (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.4. Adoptar las medidas que se consideren necesarias para promover la presentación de denuncias relacionadas con actos de corrupción, por ejemplo, considerando aceptar denuncias anónimas o a través de Internet (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.5. Empezar mayores esfuerzos para asegurar una divulgación más amplia y adecuada de las oportunidades de capacitación que ofrece el Centro de Profesionalización Gubernamental (CEPROG) de la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, entre otros, publicando anticipadamente la información sobre estos tipos de eventos y manteniendo constantemente actualizado el calendario de capacitación del CEPROG (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.6. Producir manuales o documentos que detallen los procedimientos que debe seguir el personal de la CGC en el desempeño de sus responsabilidades (ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.7. Llevar a cabo un estudio para determinar los factores que podrían estar provocando el bajo número de denuncias que recibe la Contraloría General de Cuentas y, a partir de los resultados de dicho estudio, adoptar las medidas correctivas que se consideren necesarias (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe).
- 3.4.8. Mantener resultados sobre el número de sanciones económicas impuestas en relación con actos de corrupción, así como información sobre los tipos de actos de corrupción que han dado como resultado la imposición de tales sanciones, a fin de identificar desafíos y poner en práctica medidas correctivas (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe).

- 3.4.9. Mantener resultados sobre las investigaciones realizadas por la Contraloría General de Cuentas consiguientes a las auditorías que lleva a cabo, en los que se muestren: el número de investigaciones relacionadas con actos de corrupción que se han emprendido; el número de investigaciones en las que se concluyó que no hubo irregularidad; el número de investigaciones que han sido suspendidas; el número de casos que han prescrito por no haberse concluido dentro del plazo establecido; el número de casos archivados; cuántas se encuentran en una situación que permita tomar una decisión con respecto al fondo; así como información sobre el tipo de falta administrativa o violación que ha dado lugar a la investigación, a fin de identificar desafíos e implementar medidas correctivas (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe).
- 3.4.10. Mantener resultados que indiquen los tipos de supuestos actos de corrupción identificados por la Contraloría General de Cuentas y que hayan dado como resultado la presentación de denuncias penales ante el Ministerio Público o ante el Organismo Judicial para su procesamiento, así como el seguimiento de los procesamientos penales correspondientes, con el fin de identificar desafíos e implementar medidas correctivas (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe).
- 3.4.11. Asegurar que los informes sobre las entidades auditadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) se publiquen en el portal en Internet de la institución, para, entre otros, promover la adecuada divulgación de las actividades de la CGC (ver sección 3.3 del capítulo II de este informe).

#### **4. ORGANISMO JUDICIAL**

##### **4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas**

[187] El Organismo Judicial cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[188] El artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto No. 2-89, hace responsable al Organismo Judicial de impartir justicia conforme la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país.

[189] Con respecto a sus funciones, el artículo 52 de la Ley del Organismo Judicial establece, entre otras cosas, que las funciones jurisdiccionales del Organismo Judicial corresponden a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales que a ella están subordinados y que las funciones administrativas corresponden a la Presidencia de dicho Organismo y a las direcciones y dependencias subordinadas a la misma.

[190] El artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial le asigna a la Corte Suprema, entre otras, las siguientes atribuciones: nombrar, remover y sancionar a los Jueces y al personal (artículo 54(4)); solicitar al Congreso de la República la remoción de los Magistrados de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados (artículo 54(5)); emitir los reglamentos, acuerdos y órdenes ejecutivas conforme a la ley (artículo 54(6)); aprobar el presupuesto del Organismo Judicial (artículo 54(7));

dictar resoluciones disciplinarias para los Jueces y Magistrados (artículo 54(8));<sup>63</sup> ejercer la iniciativa de ley (artículo 54(10)).

[191] El artículo 55 de la Ley del Organismo Judicial hace al Presidente del Organismo Judicial responsable, entre otras cosas, de nombrar, sancionar y destituir a los funcionarios y empleados administrativos (artículo 55(1)); emitir acuerdos, circulares e instructivos (artículo 55(2)); ser el órgano de ejecución del presupuesto del Organismo Judicial (artículo 55(5)); e imponer sanciones (artículo 55(9));

[192] El artículo 203 de la Constitución establece que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y que la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley disponga. Este artículo señala además que ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. En este sentido, la respuesta del país analizado observa que “... *para sancionar los actos de corrupción, es necesario un proceso legal en el cual interviene el Ministerio Público, como representante de la Sociedad, y otros actores procesales.*”<sup>64</sup>

[193] El artículo 205 de la Constitución prevé que el Organismo Judicial goza de independencia funcional y económica, así como independencia con respecto a la selección del personal, y que los magistrados y jueces de primera instancia solamente pueden ser destituidos por las causas previstas en la ley.

[194] Con respecto a la toma de decisiones en el Organismo Judicial, la respuesta explica que los magistrados y jueces toman sus decisiones basadas en el principio de legalidad, en la aplicación de la ley y sin intervención de alguna otra autoridad.<sup>65</sup> Sus decisiones son unipersonales, cuando se trata de Juzgados de Paz o de Primera Instancia del Ramo Penal, o bien colegiados cuando son Salas o la Corte Suprema de Justicia.<sup>66</sup>

[195] En la respuesta al cuestionario se explica además que las decisiones tomadas por los jueces son revisadas por un tribunal superior cuando los sujetos procesales impugnan el fallo del juicio respectivo. Con respecto a las decisiones administrativas efectuadas por los jueces, son revisadas por la Junta de Disciplina Judicial y el Consejo de la Carrera Judicial, según la Ley de la Carrera Judicial.

[196] De acuerdo con el artículo 214 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, uno de los cuales, además de ser el Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia con autoridad sobre los tribunales de toda la República. Según el artículo 215 de la Constitución, los magistrados de la Corte Suprema son electos por el Congreso para un período de cinco años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada de conformidad con la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto No. 12-2009.

---

<sup>63</sup> Sobre este aspecto, los representantes del Organismo Judicial explicaron que mientras que la Ley del Organismo Judicial data desde el año 1989, los Decretos 41-99 (Ley de la Carrera Judicial) y 48-99 (Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial) fueron aprobados en 1999, lo que generó el establecimiento de Órganos Administrativos y procedimientos disciplinarios para jueces y magistrados y personal auxiliar judicial, administrativo y técnico, respectivamente, en cuyos procedimientos se respetan las garantías del debido proceso y el derecho a impugnar.

<sup>64</sup> Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 35, *supra* nota 9.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*



[197] El artículo 215 señala además que los magistrados de la Corte Suprema eligen, entre sus miembros, al presidente del Organismo Judicial, para un término de un año, sin posibilidad de reelección, durante el período de cinco años de la Corte. Con respecto a la remoción de los magistrados de la Corte Suprema, la respuesta señala que como resultado de la garantía de no remoción establecida en el artículo 205 de la Constitución, los magistrados solamente pueden ser removidos por el Congreso por las causales indicadas en la ley.<sup>67</sup>

[198] Asimismo, el artículo 206 de la Constitución les otorga a los magistrados y jueces el derecho de antejuicio y dispone en su parte pertinente que *“El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente del Organismo Judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces.”*

[199] Con respecto al reclutamiento de recursos humanos por el Organismo Judicial, se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto No. 41-99, con respecto a los operadores de justicia, y de conformidad con la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto No. 48-99, con respecto al personal auxiliar, administrativo y técnico.

[200] En lo relativo a la existencia de manuales o documentos que describan las funciones del personal del Organismo Judicial, la respuesta al cuestionario observa que *“El Organismo Judicial desarrolla su función sustantiva dentro del marco de la Ley del Organismo Judicial, en donde se encuentran enmarcadas las facultades de los juzgadores en general; y en forma particular para los procesos civiles, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en materia penal en el Código Procesal Penal, en materia Administrativa en la Ley de lo Contencioso Administrativo y la Ley del Tribunal de Cuentas, y, en el ámbito laboral, en el Código del Trabajo.”*<sup>68</sup> Asimismo, la respuesta señala que la Presidencia del Organismo Judicial aprobó el manual de procedimientos de la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del Organismo Judicial, en resolución número 318-2010. Además, en resolución número 000661 de 2012 se aprobó un Manual de Procedimientos de la Junta de Disciplina Judicial, y Gerencia General del Organismo Judicial, así como un Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial. Durante la visita *in situ* se le entregaron al equipo de análisis copias de distintos manuales que describen las funciones de los diferentes tribunales y cortes del Organismo Judicial.

[201] En lo que toca a las acciones emprendidas con fines de fortalecimiento institucional y la implementación de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores del Organismo Judicial, durante la visita *in situ* se llevó al equipo de análisis a un recorrido de distintas instalaciones del Organismo Judicial, incluidos los juzgados de primera instancia penal y las salas de apelaciones, los juzgados civiles, de niñez y familia y sus instalaciones, juzgados de trabajo y sus instalaciones y los recién creados juzgados especializados en femicidio y sus instalaciones. Asimismo, los representantes de distintos juzgados explicaron los avances recientes que se han logrado en cuanto a infraestructura a través del Organismo Judicial, gracias a recursos obtenidos de donantes extranjeros.

[202] Durante la visita *in situ*, los representantes del Organismo Judicial explicaron el progreso que se ha alcanzado en la modernización de la administración de justicia en Guatemala, que incluye, entre otros, el cambio de argumentos escritos a orales en el procesamiento de los casos, lo que, junto con otros cambios, ha reducido el tiempo de trámite para una gran cantidad de casos; el Sistema de

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, pág. 37.

<sup>68</sup> *Ibid.*, pág. 42.

Integridad Institucional del Organismo Judicial (SIIJO), que se está implementando actualmente y que se orienta a mejorar los resultados de la administración de justicia, el combate a la corrupción y la mejora de las normas de ética.

[203] Con respecto a la manera en que se les suministra a los ciudadanos información acerca de los objetivos y funciones del Organismo Judicial, los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y cómo presentar quejas ante el mismo, la respuesta al cuestionario observa que en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Organismo Judicial abrió un portal en Internet, disponible en <http://www.oj.gob.gt/>, para brindar a la ciudadanía información de la institución y de sus servicios.<sup>69</sup> Este portal contiene, entre otras cosas, información sobre la estructura del Organismo Judicial, leyes y reglamentos pertinentes relacionados y expedidos por la institución, vacantes, boletines judiciales, información sobre la ejecución del presupuesto, un formulario para solicitudes de acceso a información, así como información sobre las maneras de presentar quejas ante el Organismo Judicial, lo que puede hacerse en persona, por vía telefónica o electrónicamente a través del portal en Internet.

[204] La respuesta también señala que los centros de gestión del Organismo Judicial también proporcionan información sobre los procesos judiciales y sobre los casos, así como sobre la forma de acceder a la administración de justicia.<sup>70</sup> Por último, la oficina de comunicación social imprime trifolios, boletines, comunicados de prensa, así como información en la página Web de las actividades del Organismo Judicial.<sup>71</sup>

[205] Con respecto a los controles internos en el Organismo Judicial, así como a la manera en que se manejan las quejas, la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, Decreto No. 48-99, crea la Unidad de Supervisión General de Tribunales para verificar la pronta y cumplida administración de justicia. De acuerdo con la respuesta al cuestionario, esta unidad es responsable de supervisar los juzgados y tribunales de toda la República,<sup>72</sup> para lo cual lleva a cabo visitas de inspección periódicas, cuando son ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de sus Cámaras o la Presidencia del Organismo Judicial, con el propósito de determinar, entre otras cosas, la imparcialidad con que son tratados los negocios judiciales y la observancia de los plazos y formalidades del proceso. La Unidad de Supervisión General de Tribunales también es responsable de practicar investigaciones de las denuncias promovidas contra jueces y demás personal del Organismo Judicial, cuando lo ordena el Consejo de la Carrera Judicial. El Organismo Judicial también ha creado líneas telefónicas y una cuenta de correo electrónico para la recepción de quejas.

[206] Según el artículo 213 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia es responsable de formular el presupuesto del Organismo Judicial. Este artículo señala además que el presupuesto asignado al Organismo Judicial no debe ser menor del 2% de los ingresos del Estado y que los fondos derivados de la administración de justicia son privativos del Organismo Judicial, el cual es responsable de su inversión.

[207] Con respecto a los mecanismos de coordinación con otros órganos de control superior, el Organismo Judicial ha celebrado un convenio con la COPRET, la CGC, el Ministerio Público y la

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, pág. 43.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, pág. 44.

Procuraduría General de la Nación, a fin de facilitar el seguimiento de los casos, así como de las recomendaciones formuladas, entre otros, por el MESICIC.<sup>73</sup>

[208] En cuanto a la capacitación periódica para funcionarios y empleados del Organismo Judicial, mediante Acuerdo No. 40-92 se creó la Escuela de Estudios Judiciales para impartir capacitación, formación y perfeccionamiento judicial. Según la respuesta al cuestionario, la Escuela propone las políticas de capacitación, además de oportunidades de capacitación del personal judicial.

[209] Con respecto a los mecanismos de rendición de cuentas, durante la visita *in situ*, los representantes del Organismo Judicial indicaron que se lleva a cabo en gran medida a través del portal en Internet de la institución, así como a través de boletines producidos por la Oficina de Comunicación Social del Organismo Judicial.

#### **4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas**

[210] El Organismo Judicial cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1 de este informe. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[211] En primer lugar, con respecto a la capacitación para funcionarios y empleados del Organismo Judicial, el Comité observa que la suministra la Escuela de Estudios Judiciales. Sin embargo, el Comité observa también que la respuesta al cuestionario señala que una de las dificultades que enfrenta el Organismo Judicial con respecto al desempeño de sus funciones es la necesidad de capacitar a jueces y magistrados en el procesamiento de delitos de corrupción y de cuello blanco y también para sensibilizarlos con los temas de transparencia y corrupción.<sup>74</sup> Asimismo, como se indicó en la sección 2.2 de este informe, los representantes del Ministerio Público informaron que la falta de capacitación de los jueces en temas de combate a la corrupción ha dado lugar a demoras en casos de juzgamientos. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.1 del capítulo II de este informe).

[212] En segundo lugar, y en relación con lo anterior, durante la visita *in situ*, tanto los representantes del Ministerio Público como los representantes de la sociedad civil sugirieron que podría ser útil que el Organismo Judicial contemplara el establecimiento de jueces y tribunales especializados anticorrupción para que el enjuiciamiento de delitos de corrupción fuera más ágil y eficiente. Durante las reuniones con el Organismo Judicial, los representantes de esa institución, incluido el Presidente de la Corte Suprema, señalaron que uno de los objetivos de las medidas que se han tomado y que se están tomando para modernizar las distintas áreas del Organismo Judicial, es reducir la demora judicial, que es una preocupación constante del público. En este sentido, el Comité considera que podría convenir que el Organismo Judicial, como parte del proceso continuo de modernización, contemplara la utilidad o la necesidad de establecer jueces o tribunales especializados anticorrupción, con miras a mejorar el desempeño de las funciones del Organismo Judicial relacionadas con la sanción de actos de corrupción (ver recomendación 4.4.2 del capítulo II de este informe).

[213] En tercer lugar, durante la visita *in situ*, los representantes de la Cámara Civil del Organismo Judicial señalaron que como parte de los esfuerzos continuos para modernizar el enjuiciamiento de

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, pág. 45.

<sup>74</sup> *Ibid.*, pág. 72.

los casos, incluyendo los relacionados con actos de corrupción, se está preparando una nueva versión del Código Procesal Civil, que incluirá disposiciones relativas a los argumentos orales y procedimientos simplificados, entre otras.<sup>75</sup> El Comité considera importante que continúen estos esfuerzos y formulará la recomendación correspondiente (ver recomendación 4.4.3 del capítulo II de este informe).

[214] En cuarto lugar, con respecto a los controles internos en el Organismo Judicial, el Comité observa la ausencia de documentos relacionados con los antecedentes y el funcionamiento de la Unidad de Supervisión General. En tal sentido, el Comité considera importante que el país analizado emita o publique documentos que describan claramente las funciones y la operación de esta unidad, particularmente tomando en cuenta que esta unidad es responsable, entre otras cosas, de supervisar los tribunales e investigar denuncias presentadas contra jueces y otro personal del Organismo Judicial. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.4 del capítulo II de este informe).

[215] En quinto lugar, de manera similar a lo anterior, el Comité observa que según las garantías constitucionales de independencia judicial, los jueces y magistrados solamente pueden ser removidos por el Congreso de conformidad con la ley. Sin embargo, no se le han presentado al Comité indicaciones de que exista algún reglamento que extienda este principio constitucional, ni información sobre los procesos relacionados con la disciplina de los jueces, los magistrados o el personal no judicial. El Comité formulará una recomendación tomando en cuenta esta situación (ver recomendación 4.4.5 del capítulo II de este informe).

[216] En sexto lugar, y en relación con a la existencia de manuales que describan las funciones del personal, así como la existencia de manuales o documentos que describan los procedimientos, el Comité reconoce, como se indica en la respuesta, que las funciones judiciales se llevan a cabo de conformidad con las leyes aplicables, incluyendo varios códigos de procedimiento. Además, el Comité observa que el Organismo Judicial ha producido diversos manuales en los que se detallan distintos procedimientos.<sup>76</sup> Sin embargo, el Comité observa una ausencia de manuales que describan las funciones y responsabilidades del personal no judicial empleado por el Organismo Judicial, y formulará una recomendación en este sentido (ver recomendación 4.4.6 del capítulo II de este informe).

### **4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas**

[217] La respuesta al cuestionario del país y la visita *in situ* produjeron información sobre los resultados obtenidos por el Organismo Judicial en el cumplimiento de sus funciones, entre la que se destaca la siguiente:

[218] En primer lugar, con respecto a los resultados relacionados con la sanción por parte del Organismo Judicial de los delitos de corrupción, después de la visita *in situ*, los representantes del

---

<sup>75</sup> Ver la presentación titulada “Proyectos Cámara Civil, Organismo Judicial”, disponible en:

[http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm).

<sup>76</sup> En cuanto a la existencia de manuales, el Organismo Judicial expresa que “*En cuanto a un documento que describa funciones del personal no judicial, se encuentra en aprobación el Manual para la Efectiva Gestión de Personal, el cual responde a los lineamientos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Quinquenal 2011-2015 del Organismo Judicial. Asimismo, viabiliza la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas en los Juzgados Penales. Se trata de una herramienta para el empoderamiento gerencial de los secretarios en materia de recurso humano.*”

Organismo Judicial suministraron un cuadro que muestra las sentencias dictadas en relación con delitos que involucraron acciones contra la administración de justicia de 2009 a 2013.<sup>77</sup> En el cuadro se indican el número de casos en los que se dictaron sentencias (condenatoria o absolutoria) por los juzgados de paz, juzgados de paz penal, juzgados de primera instancia ramo mixto, juzgados de primera instancia de adolescentes en conflicto con la ley penal y tribunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, respectivamente. Además, en el cuadro se desglosan las sentencias por los tipos de delitos, que incluyen, entre otros, uso de información, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, usurpación de atribuciones, cohecho pasivo y activo, peculado, peculado culposo, malversación, fraude y extracciones ilegales.

[219] Se entregó un segundo cuadro en que aparece el número de casos tramitados por cada uno de los juzgados que integran los órganos jurisdiccionales de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, desglosados por tipo de delito.<sup>78</sup>

[220] El Comité observa que los dos cuadros mencionados arriba no presentan resultados sobre el número de casos que están listos para un fallo, ni sobre los casos que no pueden proceder porque han prescrito.<sup>79</sup> El Comité formulará una recomendación sobre este punto (ver recomendación 4.4.7 del capítulo II de este informe).

[221] En segundo lugar, el Comité no ha observado ningún resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad de Supervisión General de Tribunales con respecto a la disciplina de los funcionarios y empleados del Organismo Judicial y formulará una recomendación en este sentido (ver recomendación 4.4.8 del capítulo II de este informe).

[222] En tercer lugar, durante la visita *in situ*, los representantes del Organismo Judicial señalaron la falta de resultados creíbles sobre la sanción penal de actos de corrupción. En este sentido, los representantes indicaron que muy probablemente los únicos resultados confiables eran los que indicaban el número de casos que habían ingresado al sistema. En este sentido, los representantes explicaron que como parte de los esfuerzos para modernizar la administración de justicia y los procesos conexos en el Organismo Judicial, se han hecho esfuerzos para sistematizar los resultados precisos relacionados con todos los procesos judiciales. El Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.9 del capítulo II de este informe).

[223] En cuarto lugar, el Comité observa que el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial publica gran cantidad de documentación, disponible a través del portal en Internet del Organismo Judicial, que incluye textos de sentencias, información estadística sobre casos, una gaceta sobre los juzgados, una revista judicial y mucha otra información útil y valiosa. Sin embargo, el Comité observa también que en lo que respecta a resultados globales, la última compilación estadística disponible corresponde al período 2007-2010. En este sentido, el Comité estima que sería útil que el Organismo Judicial considerara la publicación de un informe anual que contenga información estandarizada que resuma las actividades de los distintos juzgados y tribunales dentro de esta rama del gobierno. El Comité considera que esto facilitaría, entre otras cosas, que el público pueda seguir los avances del Organismo Judicial en la ejecución de sus deberes año con año. El

---

<sup>77</sup> Este cuadro está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm).

<sup>78</sup> Este cuadro está disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm).

<sup>79</sup> Sobre este particular, los representantes del Organismo Judicial explicaron que el Artículo 155 de la Constitución Política, establece que la responsabilidad civil prescribe a los 20 años y que la responsabilidad penal extingue "...por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena."

Comité formulará una recomendación al respecto (ver recomendación 4.4.10 del capítulo II de este informe).

#### **4.4. Conclusiones y recomendaciones**

[224] Con base en el análisis integral realizado con respecto al Organismo Judicial en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

**[225] Guatemala ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer el Organismo Judicial como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.**

[226] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Impartir capacitación adecuada para jueces y magistrados en el procesamiento de delitos de corrupción y de cuello blanco e implementar mecanismos para sensibilizarlos con los temas de transparencia y corrupción (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Considerar si sería útil o necesario establecer jueces y tribunales especializados anticorrupción para mejorar las funciones del Organismo Judicial en relación con la sanción de actos de corrupción (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.3. Completar los esfuerzos en curso del Organismo Judicial para redactar una nueva versión del Código Procesal Civil para presentar ante el Congreso (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.4. Emitir o publicar, según corresponda, manuales o documentos que describan claramente las funciones y la operación de la Unidad de Supervisión General de Tribunales del Organismo Judicial (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.5. Considerar la emisión y/o publicación, según corresponda, reglamentos que dispongan los procedimientos para determinar la responsabilidad de jueces y magistrados por sus acciones, tomando en cuenta las garantías constitucionales relacionadas con la independencia judicial (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.6. Emitir manuales que describan las funciones y responsabilidades del personal no judicial del Organismo Judicial (ver sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.7. Mantener resultados que indiquen el número de casos penales que están listos para un fallo, así como sobre aquellos que no pueden proceder porque han prescrito, a fin de identificar desafíos o adoptar medidas correctivas (ver sección 4.3 del capítulo II de este informe).
- 4.4.8. Mantener resultados sobre las investigaciones realizadas por la Unidad de Supervisión General, que indiquen el número de investigaciones emprendidas, las que se han suspendido, las que han prescrito, las que se han archivado sin haberse tomado una decisión, las que se encuentran en una situación que permita tomar una

decisión con respecto al asunto investigado y las que están pendientes de decisión por la autoridad competente, a fin de identificar desafíos o adoptar medidas correctivas (ver sección 4.3 del capítulo II de este informe).

- 4.4.9. Continuar y concluir el proceso de modernización en curso en el Organismo Judicial, para que la institución pueda sistematizar la compilación de resultados en relación con la administración de justicia (ver sección 4.3 del capítulo II de este informe).
- 4.4.10. Contemplar la publicación de un informe anual que contenga información estandarizada año con año y que resuma las actividades de los distintos juzgados y tribunales dentro del Organismo Judicial, a fin de aumentar la rendición de cuentas pública (ver sección 4.3 del capítulo II de este informe).

### III. BUENAS PRÁCTICAS

[227] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda* y en la *Estructura* adoptada por el Comité para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado, las cuales ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

#### [228] En relación con la COPRET:

[229] “Monitoreo de los procesos administrativos y financieros de las instituciones del Organismo Ejecutivo”: Este monitoreo se lleva a cabo a través de los sistemas electrónicos de administración existentes, incluyendo el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN), el Sistema Informático de Gestión (SIGES), los sistemas de adquisiciones GUATECOMPRAS, el Sistema de Nómina y Registro de Personal (GUATENÓMINAS) y el Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP).<sup>80</sup>

[230] La formulación de la Propuesta de Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la COPRET.<sup>81</sup>

[231] Indicadores de cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.<sup>82</sup>

#### [232] En relación con el Ministerio Público:

[233] La reorganización de la Fiscalía contra la Corrupción, que se llevó a cabo para poner en práctica un plan estratégico para perseguir los casos de corrupción más eficaz y eficientemente. Esta

---

<sup>80</sup> Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 105, *supra* nota 9.

<sup>81</sup> Véanse la presentación sobre buenas prácticas de la COPRET y la Propuesta de Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, disponibles en:

[http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4\\_gtm\\_sp.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_gtm_sp.htm)

<sup>82</sup> Mayor información sobre los indicadores elaborados por la COPRET disponible en:

<http://www.transparencia.gob.gt/index.php/2013-02-27-22-39-12>

reorganización ha permitido, entre otras cosas, una asignación más eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles y dar prioridad a casos importantes.<sup>83</sup>

**[234] En relación con el Organismo Judicial:**

[235] El Juicio por Audiencias, que hasta ahora se ha implementado para casos penales y que consiste en audiencias en las que aparecen ambas partes de un caso con el fin de agilizar la administración de justicia y transparentarla.<sup>84</sup> La respuesta observa que con esta buena práctica se atienden más casos, se maximizan los recursos y se previenen prácticas corruptas.

**IV. SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS<sup>85</sup>**

[236] Esta sección del informe se refiere a los avances e información y desarrollos nuevos dados por Guatemala en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en los informes de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas,<sup>86</sup> y procederá a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional por el Estado analizado y, si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, según sea aplicable, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[237] Esta sección también toma nota de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

**1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

**1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

Recomendación 1.1.1:

*Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.*

La medida a, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Regular, con alcance para la generalidad de los servidores públicos, ciertas eventualidades que podrían dar lugar a conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de manera detallada y específica.*

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, pág. 108.

<sup>84</sup> *Ibid.*, págs. 103-104.

<sup>85</sup> El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se incluye en el Anexo I de este Informe.

<sup>86</sup> Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/gtm.htm>.



[238] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>87</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[239] *“Como medida alternativa, Contraloría General de Cuentas, en el formulario de Declaración Jurada Patrimonial, incluyó una cláusula que coadyuva a la prevención de conflictos de interés; las modificaciones han sido efectuadas según base legal vigente, lo cual podría ampliarse en la medida en que se reforme la ley y/o reglamento.”*<sup>88</sup>

[240] Adicionalmente, la respuesta señala que en la Circular A-003-2008, la CGC instruyó al Departamento de Auditoría de dicha institución para que se presente la excusa correspondiente cuando se le asignen auditorías en las que los empleados designados tengan algún tipo de parentesco o compromiso con funcionarios, empleados o instituciones que puedan provocar una situación que implique un conflicto de intereses.

[241] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (a) de la recomendación contenida en la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, así como de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que los pasos registrados no se refieren a la reglamentación de todos los servidores públicos, como se sugirió en la medida recomendada.

La medida b, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su competencia, o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente.*

[242] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>89</sup> el país analizado observa que no se han emprendido acciones nuevas para establecer restricciones para quienes dejan de desempeñar un cargo público. No obstante, el Comité observa que, como se indica en la respuesta al cuestionario, la Mesa Técnica de Cooperación de la Sociedad Civil presentó a la legislatura una propuesta de ley que prohibiría que jueces, fiscales o defensores puedan conocer casos contra la administración luego de dejar su cargo.

[243] En este sentido, el Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (b) de la recomendación contenida en la sección 1.1 del capítulo IV del presente informe, y de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que, como se señala en la respuesta, las medidas contempladas todavía no son leyes y se refieren a cargos específicos.

La medida c, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Diseñar e implementar mecanismos, con indicadores verificables, que sirvan para resolver consultas de los servidores públicos sobre posibles casos de conflictos de intereses, y para adoptar medidas*

---

87. Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 74, *supra* nota 9.

88 Este nuevo formulario está disponible en: [http://www.contraloria.gob.gt/i\\_docs/i\\_f\\_deju.pdf](http://www.contraloria.gob.gt/i_docs/i_f_deju.pdf).

89. Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario de la Cuarta Ronda, pág. 77, *supra* nota 9.

*que permitan remediar oportunamente las situaciones de conflictos de intereses que se detecten, tales como un régimen de excusas y recusaciones.*

[244] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>90</sup> el país analizado observa que no se han emprendido nuevas acciones para resolver las consultas de los servidores públicos. No obstante, el Comité observa, como se indica en la respuesta, que el Ministerio de Finanzas Públicas emitió disposiciones reglamentarias sobre la resolución de conflictos de intereses, tales como el régimen de excusas, recusación, reasignación de funciones y renuncia.

[245] En este sentido, el Comité toma nota de la medida adoptada por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (c) de la recomendación contenida en la sección 1.1 del capítulo IV del presente informe, y de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que, como se indica en la respuesta, no existe una política de Estado que permita confluir en medidas generalizadas para resolver conflictos de intereses, incluido un régimen de excusas y recusación, entre otros, ni mecanismos para resolver las consultas de los servidores públicos en este sentido.

La medida d, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Continuar avanzando en el proceso de reforma a la Ley del Servicio Civil, de tal manera que la misma regule algunos aspectos relacionados con conflictos de intereses aún no desarrollados en la legislación vigente.*

[246] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>91</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[247] La iniciativa de ley 4142 que, de ser aprobada por el Congreso, modificaría la Ley de Servicio Civil.

[248] El Comité toma nota de la medida adoptada por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (d) de la recomendación contenida en la sección 1.1 del capítulo IV del presente informe, y de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que la ley en cuestión todavía tiene carácter de iniciativa.

## **1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos**

### Recomendación 1.2.1:

*Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos.*

La medida a, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

---

90. *Ibíd.*

91. *Ibíd.*, pág. 79.

*Alentar la adopción de legislación penal relativa al enriquecimiento ilícito, tomando en consideración las iniciativas legales que existen al respecto.*

[249] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>92</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que lo llevan a concluir que se ha considerado la medida satisfactoriamente, los siguientes:

[250] La aprobación de la Ley contra la Corrupción, Decreto No. 31-2012, que modifica el Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada, al incluir nuevos tipos penales, entre ellos: enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada patrimonial, peculado, testaferrato, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones. Adicionalmente, la Ley contra la Corrupción modifica también los siguientes delitos, entre otros: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, nombramientos ilegales, usurpación de atribuciones, cohecho activo y pasivo, peculado por sustracción, malversación, fraude, extorsión, cobro indebido y denegación de justicia.

[251] Específicamente, el artículo 31 de la Ley contra la Corrupción establece que “*Comete delito de enriquecimiento ilícito, el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones pública, y hasta cinco años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial*”.

[252] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria de la medida (a) de la recomendación contenida en la sección 1.2 del capítulo IV del presente informe, sin perjuicio de las recomendaciones de naturaleza similar formuladas en la Tercera Ronda, cuya implementación se analizará más detalladamente en el seguimiento de dicha ronda.

### **1.3 Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

#### Recomendación 1.3.1:

*Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Guatemala para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

La medida a, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Adoptar e implementar medidas adicionales de protección para los servidores públicos, para alentarlos a denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.*

---

92. *Ibíd.*, pág. 80.

[253] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>93</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[254] – El Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas de la Contraloría General de Cuentas —que, como señala la respuesta, se creó en 2008— que permite la presentación de denuncias sobre actos de corrupción por vía telefónica, fax, correo electrónico, portal Web o en persona en cualquiera de las 21 delegaciones de la CGC ubicadas en todo el país

[255] – La línea telefónica gratuita creada por la SECyT (ahora la COPRET) para recepción de quejas susceptibles de delitos de corrupción vinculadas a funcionarios y servidores públicos del Organismo Ejecutivo, así como también para orientar la presentación de quejas de instituciones externas a dicho Organismo. Además, el sistema de denuncias de la COPRET permite la presentación de denuncias en línea y anónimas.

[256] Con respecto a la información anterior, el Comité toma nota de la medida adoptada por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (a) de la recomendación en la sección 1.3 del capítulo IV del presente informe, a través del sistema de denuncias de la COPRET. El Comité también toma nota de la necesidad de que el país analizado siga prestando atención a la implementación de esta medida, tomando en cuenta que a pesar de la creación del Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas de la CGC en 2008, y como se indica en la sección 4.2 de este informe, las denuncias solamente pueden ser presentadas ante la CGC en persona y no es posible hacerlo de forma anónima.

La medida b, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Implementar programas de capacitación para los servidores públicos, en relación con las normas sobre la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción de los que tengan conocimiento; y también implementar programas de difusión para el cumplimiento de tal obligación.*

[257] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>94</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[258] – La capacitación impartida por la CGC y el Ministerio Público en 2011 en temas de ética y mejoras en casos de corrupción.

[259] – La inclusión en los programas del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala de un diplomado sobre gobierno electrónico y cursos sobre fundamentos de transparencia y lucha contra la corrupción, acciones contra la corrupción en Guatemala y transparencia en la administración pública.

[260] – La capacitación impartida por la COPRET para las instituciones del Organismo Ejecutivo.

---

93. *Ibíd.*, pág. 82.

94. *Ibíd.*, pág. 83.

[261] Con respecto a la información anterior, el Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (b) de la recomendación contenida en la sección 1.3 del capítulo IV de este informe. El Comité también observa que la respuesta señala que los avances de los órganos de control en materia de capacitación no responden a un programa completo de capacitación y reflejan esfuerzos mínimos y escasa continuidad. En este sentido, la respuesta señala además que *“La principal dificultad para la implementación de esta medida es, que no existe una política estatal de capacitación permanente a los servidores públicos, por lo que la dinámica depende de las unidades específicas de cada institución a cargo de este tema.”*<sup>95</sup>

[262] Asimismo, el Comité observa que durante la visita *in situ*, los representantes...

[263] En vista de la información antes expuesta, el Comité también considera pertinente reformular la medida (b) de esta recomendación, como sigue:

[264] (b) Implementar un programa de capacitación integral y periódico para los servidores públicos, en relación con las normas sobre la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción de los que tengan conocimiento; y también implementar programas de difusión para el cumplimiento de tal obligación.

## **2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)**

### Recomendación 2:

*Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.*

La medida a, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, en que corresponda dar publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales, con sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República de Guatemala.*

[265] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>96</sup> el país analizado observa lo siguiente con respecto a la anterior medida:

[266] – La Ley de Probidad, Decreto 89-2002 del Congreso de la República, establece que los datos contenidos en las declaraciones juradas son confidenciales y sólo pueden verificarse por orden judicial. En consecuencia, la única institución que tiene acceso a la información es la Contraloría General de Cuentas.

[267] En vista de la información anteriormente expuesta, el Comité considera pertinente reformular la medida (a) de la recomendación en la sección 2 del capítulo IV de este informe, como sigue:

[268] (a) Considerar la adopción de las enmiendas legislativas necesarias para permitir la reglamentación de los procedimientos y demás aspectos en que corresponda dar publicidad a las

---

95 *Ibid.*, pág. 84.

96. *Ibid.*, pág. 85.

declaraciones juradas patrimoniales, con sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República de Guatemala.

La medida b, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales, con el objeto de que sirvan también como útil herramienta para la detección y prevención de conflictos de intereses, cuando corresponda, además de su utilización como instrumento idóneo para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito.*

[269] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>97</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[270] – El Sistema de Gobierno Electrónico (IPROB), creado por la Dirección de Probidad de la CGC, que permite presentar en línea las declaraciones juradas patrimoniales y la posterior verificación de los datos contenidos en ellas. La respuesta también observa que de resultar falsa la información, se presenta denuncia ante el Ministerio Público para su procesamiento.

[271] – Los convenios de cooperación firmados con otras instituciones, a fin de que la CGC obtenga acceso directo a la información necesaria para mejorar el proceso de verificación, incluyendo la Superintendencia de Administración Tributaria, tres municipalidades y la Dirección de Registro Catastral de Bienes Inmuebles.

[272] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (b) de la recomendación en la sección 2 del capítulo IV de este informe, así como de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, dado que durante la visita *in situ*, la CGC no estaba en situación de suministrar resultados sobre la verificación que se lleva a cabo con respecto a las declaraciones juradas. Asimismo, aunque la información que se presenta arriba señala que la entrega de información falsa en las declaraciones juradas se está identificando y remitiendo al Ministerio Público para su procesamiento, no se ha presentado información que indique que se estén empleando las declaraciones para prevenir conflictos de intereses, o como instrumento para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

[273] Adicionalmente, el Comité observa lo que se expresa en la respuesta del país analizado en el sentido de que “*La principal dificultad para la implementación de esta recomendación es la falta de institucionalización de un sistema que pueda brindar criterios técnicos y métodos para el análisis de información. La ausencia de una política institucional por parte de Contraloría General de Cuentas... genera falta de certeza en cuanto a la utilización de un criterio unificado que permita una guía a quienes lo apliquen y así se evite la discrecionalidad en el análisis.*”<sup>98</sup>

La medida c, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Fortalecer las previsiones relativas a la verificación, por parte de Contraloría General de Cuentas, en el contenido de las declaraciones que se presentan al ingresar al cargo, establecidas en el*

---

97. *Ibid.*, págs. 86-87.

98 *Ibid.*, pág. 87.

*artículo 24 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y armonizarlas con lo dispuesto en el artículo 21 de la citada ley, de tal manera que dicha entidad pueda contar con sistemas que le permitan impulsar y efectuar oportunamente la verificación que le compete.*

[274] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>99</sup> el país analizado observa lo siguiente con respecto a la anterior medida:

[275] – *“Como una medida alternativa, puede considerarse un avance para la verificación, la entrada en vigencia de la ley de Extinción de Dominio,... que constituye una herramienta útil que debe de ser complementada con preceptos que brinden las condiciones necesarias para una efectiva investigación que se verá reforzada con la Ley contra la Corrupción, recientemente aprobada, la cual castiga actividades como el testaferrato.”*<sup>100</sup>

[276] – La respuesta también observa, como una segunda medida alternativa, la implementación del nuevo sistema de probidad en línea, IPROB, que permite presentar en línea la declaración jurada patrimonial, así como la promoción de convenios de cooperación interinstitucional de la CGC con otras instituciones.

[277] Con respecto a la información anterior, el Comité toma nota de la medida adoptada por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (c) de la recomendación en la sección 2 del capítulo IV de este informe, a través de la entrada en vigor de la Ley de Extinción del Dominio y de la implementación del sistema IPROB. No obstante, el Comité también toma nota de la necesidad de que el país analizado siga prestando atención a la implementación de esta medida, dado que, como se indica en la respuesta, *“No existe ninguna acción concreta por parte del Estado de Guatemala para el fortalecimiento de las previsiones relativas a la verificación del contenido de las declaraciones que se presentan al ingresar a un cargo. El carácter de las verificaciones aún continúa siendo facultativo y discrecional para Contraloría General de Cuentas y no cuenta con un desarrollo que facilite a dicha entidad contar con sistemas para impulsar y efectuar oportunamente la verificación respectiva.”*<sup>101</sup>

La medida d, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Adecuar los formularios para la presentación de las declaraciones, de tal manera que en ellos se requiera, a los declarantes, consignar la información mínima exigida por el artículo 23 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, al igual que la que se derive de la exigencia, contenida en el último párrafo de ésta norma, respecto a que se especifique que los bienes y rentas declarados son los únicos que poseen.*

[278] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>102</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

---

99. *Ibid.*, pág. 85.

100 *Ibid.*, pág. 88.

101 *Ibid.*

102 *Ibid.*, págs. 86-87.

[279] – La inclusión dentro del formulario de declaración jurada patrimonial de información que podría ayudar a la identificación de conflictos de intereses.

[280] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida (d) de la recomendación en la sección 2 del capítulo IV de este informe, así como de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que, como se indica en la respuesta, “*Se encuentra aún pendiente la adecuación del formulario en temas específicos como la participación del declarante en juntas o consejos directivos de cualquier índole, asociaciones, sociedades de hecho y participaciones entre compañeros permanentes.*”<sup>103</sup>

### **3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

#### Recomendación 3:

*Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control efectivo del cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, cuando corresponda, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y fortaleciendo los mecanismos que permiten la coordinación institucional de sus acciones y su continua evaluación y seguimiento, e igualmente promoviendo nuevos mecanismos para tal fin, cuando corresponda.*

[281] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>104</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[282] – Acciones emprendidas en el marco de la Política de Fortalecimiento Institucional de la CGC, que incluyen: Mejoras en el nivel de eficiencia de las dependencias de la CGC, medido según un estudio efectuado por KMPG, del 61% en 2006 al 75% en 2008; la emisión del Acuerdo Gubernativo 235-2008 que regula el Plan de Clasificación de Puestos y el Régimen de Salarios; las acciones en el marco del convenio entre la CGC y el Foro de Discusión, Propuesta y Seguimiento, con la Coalición por la Transparencia;<sup>105</sup> la implementación de nuevos procedimientos para hacer más eficientes los trámites administrativos (por ejemplo, las Declaraciones Juradas Patrimoniales y el Registro de Títulos); la creación de nuevas Unidades en el ámbito técnico, como la Dirección de Auditoría de Fideicomisos, la Unidad de Monitoreo y Alerta Temprana, el Departamento de Auditorías Concurrentes, el Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas y la Unidad de Información Pública; la suscripción de un Convenio de Cooperación con la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, por el cual ya se ha obtenido asistencia técnica; la implementación de un nuevo y moderno Sistema de Gestión Documental; los financiamientos internacionales obtenidos en 2009 para apoyar el fortalecimiento de la CGC.

[283] El Comité también toma nota de la dificultad relacionada con el fortalecimiento de los órganos de control superior expresada en la respuesta, en el sentido de que “*...en que no existe una política de*

---

103 *Ibid.*, pág. 90.

104 *Ibid.*, págs. 91-92.

105. La respuesta al cuestionario señala que esta Coalición está conformada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Cámara de Comercio de Guatemala y Acción Ciudadana, la Comisión Extraordinaria de Transparencia del Congreso de la República y la COPRET.



*Estado dirigida al fortalecimiento de los órganos de control en relación con los aspectos relacionados en la convención. Lo anterior provoca que el fortalecimiento de las instituciones del Estado se dé de manera aislada y poco armónica, creando disfuncionalidades que dan lugar a la impunidad y el ejercicio de prácticas corruptas.”*

[284] En vista de esta situación, así como del hecho de que ahora existe un convenio interinstitucional entre varios órganos de control superior, el Comité considera pertinente reformular la recomendación 3, como sigue:

[285] 3. Dentro del marco del convenio interinstitucional firmado, entre otros, entre la COPRET a nombre del Organismo Ejecutivo, la CGC, el MP y el Organismo Judicial, contemplar la formulación e implementación de una política integral de Estado relacionada con el fortalecimiento de las labores de los órganos de control superior en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control efectivo del cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 del artículo III de la Convención.

#### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)**

##### **4.1. Mecanismos para el acceso a la información**

La recomendación formulada en relación con esta sección ha sido considerada satisfactoriamente y no se requiere atención adicional.

##### **4.2. Mecanismos de consulta**

La recomendación formulada en relación con esta sección ha sido considerada satisfactoriamente y no se requiere atención adicional.

##### **4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

La recomendación formulada en relación con esta sección ha sido considerada satisfactoriamente y no se requiere atención adicional.

##### **4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

###### Recomendación:

*Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.*

La medida b, que requiere atención adicional según los términos que figuran en los informes de la Segunda y la Tercera Rondas:

*Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública dirigidos a la sociedad civil y capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la misma y a las organizaciones no gubernamentales para la utilización adecuada de tales mecanismos.*

[286] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>106</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[287] – El hecho de que Guatemala sea parte de la Iniciativa de Sociedad de Gobierno Abierto (*Open Government Partnership* – OGP), que le permite al país analizado fortalecer las diferentes iniciativas que ha adelantado en materia de transparencia, control social, acceso a la información y lucha contra la corrupción, así como la creación de un Plan de Acción y de la Estrategia de la Iniciativa de OGP en Guatemala.

[288] – La creación de la COPRET y su portal en Internet, que sirve, entre otras cosas, como punto integrado de acceso para solicitudes de información y presentación de quejas.

[289] – Las acciones emprendidas por la COPRET y anteriormente por la SECyT para promover el acceso a la información pública, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.

[290] – Las mesas interinstitucionales con diferentes sectores sociales, para, entre otras cosas, realizar un seguimiento de manera focalizada y estimular el uso de buenas prácticas.

[291] – Los anteproyectos de ley promovidos por la Presidencia en relación con el fortalecimiento de la institucionalidad para la transparencia y la calidad del gasto público.

[292] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en su implementación de la medida restante de la recomendación en la sección 4.4 del capítulo IV de este informe, así como de la necesidad de que continúe prestando atención a la misma, tomando en cuenta que en el análisis que figura en el informe de la Primera Ronda, en el que se basa la medida, se recomienda que la CGC promueva medidas para la participación ciudadana, de conformidad con el artículo 3(b) de su Ley Orgánica.

## **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)**

### **Recomendación 5.1:**

*Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de Guatemala.*

[293] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>107</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[294] – La inclusión en los programas del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala de un diplomado sobre gobierno electrónico y cursos sobre fundamentos de transparencia y lucha contra la corrupción, acciones contra la corrupción en Guatemala y transparencia en la administración pública.

---

106. *Ibid.*, págs. 94-98.

107. Véase la respuesta de Guatemala al Cuestionario de la Cuarta Ronda, págs. 98-99, *supra* nota 9.

[295] – La capacitación impartida por la CGC en 2011 a 742 empleados de las entidades bajo su supervisión, en materia de ética y moral.

[296] – La capacitación impartida por el Ministerio Público para sus empleados sobre mejoras en casos de corrupción.

[297] – La capacitación impartida por la SECyT (ahora la COPRET) para las dependencias gubernamentales en el Organismo Ejecutivo.

[298] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en su implementación de la recomendación 5.1 anterior. En este sentido, el Comité observa asimismo, como se describe en la respuesta, que *“No se tiene conocimiento de un programa integral de difusión y capacitación dirigida a funcionarios y autoridades competentes, para la aplicación de disposiciones de asistencia recíproca entre Estados parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.”*

[299] De igual manera, el Comité toma nota de la dificultad expresada en la respuesta en relación con la ausencia de una política que implique el impulso de programas de difusión y capacitación o de una coordinación interinstitucional que pueda permitir el desarrollo de programas integrales para la generalidad de funcionarios públicos.

[300] En vista de esta situación, así como del hecho de que ahora existe un convenio interinstitucional entre varios órganos de control superior, el Comité considera pertinente reformular la recomendación 5.1, como sigue:

[301] 5.1. Dentro del marco del convenio interinstitucional firmado, entre otros, entre la COPRET a nombre del Organismo Ejecutivo, la CGC, el MP y el Organismo Judicial, contemplar la formulación e implementación de una política integral de Estado relacionada con divulgación y capacitación de funcionarios y empleados públicos, para que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de Guatemala.

#### Recomendación 5.2:

*Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Guatemala considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte, para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.*

[302] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>108</sup> el país analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida anterior, de los cuales el Comité observa, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[303] – Los proyectos de cooperación técnica que han firmado los órganos de control superior guatemaltecos, respectivamente, y USAID, como parte de su Proyecto de Transparencia e Integridad, con el fin de combatir la corrupción y promover un sistema de integridad institucional.

[304] – La coordinación interinstitucional entre organismos internacionales de cooperación y los órganos de control, para la suscripción de convenios de cooperación técnica.

---

108. *Ibid.*, págs. 99-100.

[305] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el país analizado para avanzar en su implementación de la recomendación 5.2 anterior. En este sentido, el Comité observa además, como se describe en la respuesta, que *“La mayor dificultad se da en virtud de una ausencia de una política integral de coordinación para determinar las áreas de necesidad y de cooperación de los órganos del Estado; hay una ausencia de mesas de diálogo permanentes interinstitucionales, para determinar acciones de fortalecimiento en el desarrollo pleno de su funciones en materia anticorrupción.*

[306] En vista de la anterior circunstancia, así como del hecho de que ahora existe un convenio interinstitucional entre varios órganos de control superior, el Comité considera pertinente reformular la recomendación 5.2, como sigue:

[307] 5.2. Dentro del marco del convenio interinstitucional firmado, entre otros, entre la COPRET a nombre del Organismo Ejecutivo, la CGC, el MP y el Organismo Judicial, contemplar la formulación e implementación de una política integral de Estado que le permita al país analizado determinar áreas en que considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

El Comité no le formuló recomendaciones al país analizado en relación con esta disposición de la Convención.

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

### Recomendación 7.2:

*Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, Guatemala podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados aplicables al sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en sitio WEB de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.*

[308] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>109</sup> el país analizado observa que no existe información disponible con respecto a la implementación de la recomendación anterior. Por lo tanto, el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado dé atención adicional a la implementación de esta recomendación, que se reenumerará como recomendación 7.1.

### Recomendación 7.3:

*Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.*

[309] En su respuesta al cuestionario de la Cuarta Ronda,<sup>110</sup> el país analizado observa que no existe información disponible con respecto a la implementación de la recomendación anterior. Por lo tanto,

---

109. *Ibid.*, pág. 101.

110. *Ibid.*, pág. 102.

el Comité toma nota de la necesidad de que el país analizado dé atención adicional a esta recomendación, que se reenumerará como recomendación 7.2.

## **ANEXO 1**

### **RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA**

#### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

##### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

###### **Recomendación:**

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los conflictos de intereses.

###### **Medidas sugeridas:**

- a) Regular, con alcance para la generalidad de los servidores públicos, ciertas eventualidades que podrían dar lugar a conflictos de intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de manera detallada y específica.
- b) Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su competencia, o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente.
- c) Diseñar e implementar mecanismos, con indicadores verificables, que sirvan para resolver consultas de los servidores públicos sobre posibles casos de conflictos de intereses, y para adoptar medidas que permitan remediar oportunamente las situaciones de conflictos de intereses que se detecten, tales como un régimen de excusas y recusaciones.
- d) Continuar avanzando en el proceso de reforma a la Ley del Servicio Civil, de tal manera que la misma regule algunos aspectos relacionados con conflictos de intereses aún no desarrollados en la legislación vigente.

##### **1.2. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

La recomendación formulada en relación con esta sección ha sido considerada satisfactoriamente y no se requiere atención adicional.

##### **1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

###### **Recomendación:**

Fortalecer los mecanismos con los que cuenta la República de Guatemala para exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.

Medidas sugeridas:

- a) Adoptar e implementar medidas adicionales de protección para los servidores públicos, para alentarlos a denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento.
- b) Implementar un programa de capacitación integral y periódico para los servidores públicos, en relación con las normas sobre la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción de los que tengan conocimiento; y también implementar programas de difusión para el cumplimiento de tal obligación.

**2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS  
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)**

Recomendación:

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos.

Para cumplir con esta recomendación, Guatemala podría tener en cuenta las siguientes medidas:

- b) Considerar la adopción de las enmiendas legislativas necesarias para permitir la reglamentación de los procedimientos y demás aspectos en que corresponda dar publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales, con sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la República de Guatemala.
- c) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales, con el objeto de que sirvan también como útil herramienta para la detección y prevención de conflictos de intereses, cuando corresponda, además de su utilización como instrumento idóneo para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito.
- d) Fortalecer las previsiones relativas a la verificación, por parte de Contraloría General de Cuentas, en el contenido de las declaraciones que se presentan al ingresar al cargo, establecidas en el artículo 24 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, y armonizarlas con lo dispuesto en el artículo 21 de la citada ley, de tal manera que dicha entidad pueda contar con sistemas que le permitan impulsar y efectuar oportunamente la verificación que le compete.
- e) Adecuar los formularios para la presentación de las declaraciones, de tal manera que en ellos se requiera, a los declarantes, consignar la información mínima exigida por el artículo 23 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, al igual que la que se derive de la exigencia, contenida en el último párrafo de ésta norma, respecto a que se especifique que los bienes y rentas declarados son los únicos que poseen.

**3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES  
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCION)**

Recomendación 3.

Dentro del marco del convenio interinstitucional firmado, entre otros, entre la COPRET a nombre del Organismo Ejecutivo, la CGC, el MP y el Organismo Judicial, contemplar la formulación e

implementación de una política integral de Estado relacionada con el fortalecimiento de las labores de los órganos de control superior en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control efectivo del cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 del artículo III de la Convención

#### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCION)**

##### **4.1. Mecanismos para el acceso a la información**

La recomendación formulada en relación con esta sección ha sido considerada satisfactoriamente y no se requiere atención adicional.

##### **4.2. Mecanismos de consulta**

La recomendación formulada en relación con esta sección ha sido considerada satisfactoriamente y no se requiere atención adicional.

##### **4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública**

La recomendación formulada en relación con esta sección ha sido considerada satisfactoriamente y no se requiere atención adicional.

##### **4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública**

###### Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

#### **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCION)**

##### Recomendación 5.1:

Dentro del marco del convenio interinstitucional firmado, entre otros, entre la COPRET a nombre del Organismo Ejecutivo, la CGC, el MP y el Organismo Judicial, contemplar la formulación e implementación de una política integral de Estado relacionada con divulgación y capacitación de funcionarios y empleados públicos, para que conozcan y puedan aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de Guatemala.

##### Recomendación 5.2:

Dentro del marco del convenio interinstitucional firmado, entre otros, entre la COPRET a nombre del Organismo Ejecutivo, la CGC, el MP y el Organismo Judicial, contemplar la formulación e implementación de una política integral de Estado que le permita al país analizado determinar áreas en que considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados parte para fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.



## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)**

No se formularon recomendaciones en relación con esta sección.

## **7. RECOMENDACIONES GENERALES**

### Recomendación 7.1:

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, Guatemala podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados aplicables al sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en sitio WEB de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.2 siguiente.

### Recomendación 7.2:

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.

## **ANEXO II**

### **AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* EN GUATEMALA\***

<b>Lunes, 15 de abril de 2013</b>	
16:00 hrs. – 16:45 hrs.	<b>Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</b>
16:45 hrs. – 17:30 hrs.	<b>Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica (y la Oficina o representación de la Secretaría General).</b>
<b>Martes, 16 de abril de 2013</b>	
8:30 hrs. – 09:50 hrs. <i>Hotel Barcelo Guatemala City</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.<sup>111/</sup></b>
	<b>Tema:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cooperación entre la sociedad civil y los órganos de control en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción.</b></li><li>• <b>Retos para la lucha contra la corrupción en Guatemala.</b></li><li>• <b>Ley Contra la Corrupción</b></li></ul>
	<b><u>Participantes:</u></b> <b><i>Acción Ciudadana Guatemala, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional</i></b> Licenciado Manfredo Marroquín, Presidente de la Junta Directiva  Licenciado Marvin Flores,  Licenciado David Gaitán

\* La presente propuesta inicial de agenda ha sido elaborada por la Secretaría Técnica del MESICIC en cumplimiento de la disposición 13 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ* (documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2), disponible en: [http://www.oas.org/juridico/spanish/met\\_insitu.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf)

<sup>111</sup>. La organización de la sociedad civil “Accion Ciudadana Guatemala – Capítulo Nacional de Transparencia Internacional” participa en estas reuniones en virtud de lo previsto en la disposición 26 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, por cuanto presentó un documento relativo al Cuestionario para la Cuarta Ronda de Análisis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 b) del *Reglamento del Comité*. Se sugiere invitar a participar a las demás organizaciones y personas en virtud de lo previsto en la disposición 27 de dicha Metodología, que permite invitar a participar en estas reuniones a organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores”.

	<p><b>Fundación Myrna Mack</b> Licenciado José Pablo Rivera, Analista Jurídico</p> <p><b>Guatemala Visible</b> Ingeniero Jorge Eskenasy, Vicepresidente de la Junta Directiva.</p> <p><b>Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)</b> Licenciada Karla Campos, Coordinadora del Área de Transparencia</p>
10:00 hrs. – 11:20 hrs. <i>Hotel Barcelo Guatemala City</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación).</b>
	<p><b>Temas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperación entre el sector privado y los órganos de control en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción.</li> <li>• Retos para la lucha contra la corrupción en Guatemala.</li> <li>• Sistema de Declaración Jurada Patrimonial</li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><b>Universidad de San Carlos de Guatemala</b> Lic. Werner Castillo Regalado, Catedrático titular Escuela Ciencias Políticas</p> <p><b>Cámara de Industria de Guatemala</b> Lic. Rudolf Jacobs, Director de Junta Directiva</p> <p><b>Cámara de Comercio Guatemala</b> Rodolfo Sierra López, Director de Junta Directiva Shirley Aguilar, Asesora Económica</p> <p><b>Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA)</b> Licenciado Felipe Bosch, Presidente</p>
11:30 hrs. – 13:00 hrs. <i>Hotel Barcelo Guatemala City</i>	<b>Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores. (Continuación)</b>
	<p><b>Tema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperación entre la sociedad civil y los órganos de control en los</li> </ul>

	<p><b>esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Retos para la lucha contra la corrupción en Guatemala.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p><b>Universidad Rafael Landívar</b> Licenciado David Martínez Amador, Profesor</p> <p><b>Red Nacional por la Integridad</b> Licenciada Alma Aguilar/Co-Directora Ejecutiva</p> <p><b>Centro de Estudios de Guatemala</b> Licenciado Sandino Asturias</p>
13:00 hrs. – 14:15 hrs.	<b>Almuerzo</b>
14:15 hrs. – 15:00 hrs.	<b>Traslado al Ministerio Público</b>
15:00 hrs. – 18:30 hrs. <i>Sede del Ministerio Público</i>	<b>Ministerio Público</b>
15:00 hrs. – 16:30 hrs.	<p><b>Panel 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional (10 minutos).</b></li> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Adopción de decisiones.</b></li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Licenciada Ana Gabriela Contreras, Secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación</p> <p>Licenciada María Gabriela Mundo, Sub-Secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación</p> <p>Licenciado Javier Monterroso, Asesor del Despacho</p> <p>Licenciado Bryan García, Jefe de la Unidad de Evaluación del desempeño</p> <p>Licenciada Zulma Rodríguez, Supervisora General del Ministerio Público</p>
16:30 hrs. – 18:00 hrs.	<p><b>Panel 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resultados en relación con el cumplimiento de sus funciones</b></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dificultades para el cumplimiento de sus funciones</b></li> <li>• <b>Información sobre buena práctica con relación a sus funciones</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Licenciada Ana Gabriela Contreras, Secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación</p> <p>Licenciada Gabriela Mundo, Sub-Secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación</p> <p>Licenciado Javier Monterroso, Asesor del Despacho</p> <p>Licenciado Bryan García, Jefe de la Unidad de Evaluación del desempeño</p> <p>Licenciada Zulma Rodríguez, Supervisora General del Ministerio Público</p>
<p>18:30 hrs. – 19:00 hrs. <i>Hotel Barceló Guatemala City</i></p>	<p><b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>
<p><b>Miércoles, 17 de abril de 2013</b></p>	
<p>09:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Sede de la COPRET</i></p>	<p><b>Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET)</b></p>
<p>09:00 hrs. – 10:30 hrs.</p>	<p><b>Panel 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos</b></li> <li>• <b>Adopción de decisiones.</b></li> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas.</b></li> <li>• <b>Acciones de fortalecimiento institucional o de implementación de sistemas o tecnologías modernas.</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Licenciada Verónica Taracena, Coordinadora COPRET</p> <p>Licenciada Venettia Fernández, Subdirectora COPRET</p> <p>Licenciado Rodolfo Valenzuela, Asesor de la Dirección de</p>

	<p>indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción</p> <p>Licenciado Sebastián Herrera, Asesor de la Dirección de indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción</p> <p>Ingeniero Carlos Juárez, Asesor de la Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico</p>
10:40 hrs. – 12:30 hrs.	<p><b>Panel 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resultados</b></li> <li>• <b>Seguimiento de las Recomendaciones de la Primera Ronda</b></li> <li>• <b>Información sobre buena practica relacionada a sus funciones.</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Licenciada Verónica Taracena, Coordinadora COPRET</p> <p>Licenciada Venettia Fernández, Subdirectora COPRET</p> <p>Licenciado Rodolfo Valenzuela, Asesor de la Dirección de Indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción</p> <p>Licenciada Cinthia Villatoro, Asesora de la Dirección de Fomento a la Participación Ciudadana para la Transparencia</p>
12:30 hrs. – 13:45 hrs.	<p><b>Reunión con la Excelentísima Vicepresidenta de la República, Licenciada Roxana Baldetti, Responsable de las Iniciativas de Transparencia en Guatemala.</b></p>
13:45 hrs. – 14:30 hrs.	<p><b>Traslado a la Contraloría General de Cuentas</b></p>
14:30 hrs. – 18:00 hrs. <i>Sede de la CGC</i>	<p><b>Contraloría General de Cuentas (CGC)</b></p>
14:30 hrs. – 16:00 hrs.	<p><b>Panel 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introducción institucional (10 minutos)</b></li> <li>• <b>Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.</b></li> <li>• <b>Adopción de decisiones</b></li> <li>• <b>Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos</b></li> <li>• <b>Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades</b></li> <li>• <b>Régimen Presupuestal</b></li> </ul>

	<p><u>Participantes:</u></p> <p><b><i>Contraloría General de Cuentas</i></b>  Licenciada Nora Segura, Contralora General de Cuentas</p> <p>Licenciado Cergio Noel Bojorquez Medina, Subcontralor de Probidad</p> <p>Licenciado Selvin Manolo Galindo López, Inspector General</p> <p>Licenciado Carlos Enrique López Gutiérrez, Director de Ética y Moral</p> <p>Licenciado Ramón de Jesús Saenz Morales, Asesor del Despacho de Probidad</p>
16:10 hrs. – 18:30 hrs.	<p><b>Panel 6:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mecanismos de rendición de cuentas</b></li> <li>• <b>Resultados en relación al cumplimiento de sus funciones</b></li> <li>• <b>Dificultades para el cumplimiento de sus funciones</b></li> <li>• <b>Seguimiento de las Recomendaciones de la Primera Ronda</b></li> </ul> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Licenciado Cergio Noel Bojorquez Medina, Subcontralor de Probidad</p> <p>Licenciado Selvin Manolo Galindo López, Inspector General</p> <p>Licenciado Carlos Enrique López Gutiérrez, Director de Ética y Moral</p> <p>Licenciado Ramón de Jesús Saenz Morales, Asesor del Despacho de Probidad</p>
18:45 hrs. – 19:00 hrs. <i>Hotel Barceló Guatemala City</i>	<b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<b>Jueves, 18 de abril de 2013</b>	
09:00 hrs. – 12:30 hrs. <i>Sede del Organismo Judicial</i>	<b>Organismo Judicial</b>

09:00 hrs. – 9:50 hrs.	<p><b>Panel 7:</b></p> <p><b>Introducción institucional (10 minutos)</b></p> <p><b><u>Modelo de Gestión Penal</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Resultados en relación con el cumplimiento de sus funciones</b></li><li>• <b>Dificultades para el cumplimiento de sus funciones</b></li><li>• <b>Necesidades de cooperación técnica</b></li><li>• <b>Información sobre buena practica relacionada a sus funciones.</b></li></ul> <p><b><u>Participantes:</u></b></p> <p>Dr. Gabriel Antonio Medrano, Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia</p> <p>Dra. Wendy Maldonado Urbina, Coordinadora Administrativa Cámara Penal</p> <p>Dra. Virginia Pineda, Asesora Cámara Penal</p> <p>Licenciado Juan Carlos Oxom, Asesor Cámara Penal</p>
09:55 hrs. – 10:45 hrs.	<p><b>Panel 7 (cont.):</b></p> <p><b><u>Modelo de Gestión Civil, Niñez y Familia</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Resultados en relación con el cumplimiento de sus funciones</b></li><li>• <b>Dificultades para el cumplimiento de sus funciones</b></li><li>• <b>Necesidades de cooperación técnica</b></li><li>• <b>Información sobre buena practica relacionada a sus funciones.</b></li></ul> <p><b><u>Participantes:</u></b></p> <p>Dra. Gloria Biassini, Asesora Cámara Civil</p> <p>Licenciada Jeannie Balcarcel, Asesora Cámara Civil</p>
10:50 hrs. – 11:40 hrs.	<p><b>Panel 7 (cont.):</b></p> <p><b><u>Modelo de Gestión Laboral</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Resultados en relación con el cumplimiento de sus funciones</b></li><li>• <b>Dificultades para el cumplimiento de sus funciones</b></li><li>• <b>Necesidades de cooperación técnica</b></li><li>• <b>Información sobre buena practica relacionada a sus funciones.</b></li></ul>



	<p><u>Participantes:</u></p> <p>Dr. Juan Luis De La Roca, Director de Justicia Laboral</p> <p>Dr. Mario Román Coto, Director Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de la Justicia Laboral</p>
11:40 hrs. – 12:30 hrs.	<p><b>Panel 7 (cont.):</b></p> <p><b><u>Modelo de Gestión Penal de Delitos de Femicidio</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultados en relación con el cumplimiento de sus funciones</li> <li>• Dificultades para el cumplimiento de sus funciones</li> <li>• Necesidades de cooperación técnica</li> <li>• Información sobre buena practica relacionada a sus funciones.</li> </ul> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Dra. Myrna Ponce, Coordinadora Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados</p> <p>Dra. Cecilia Navas González, Área Legal de la Unidad de Control Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados.</p> <p>Dra. Mayra Veliz, Área Legal de la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados.</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	<b>Almuerzo con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.</b>
14:05 hrs. – 15:45 hrs.	<p><b>Panel 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Régimen de competencias y mecanismos de coordinación interinstitucional</li> <li>• Adopción de decisiones</li> <li>• Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos</li> <li>• Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades</li> <li>• Mecanismos de Rendición de Cuentas</li> </ul>
	<p><u>Participantes:</u></p>

	<p>Licenciado Yuri Búcaro Chicas, Secretario Ejecutivo Consejo de la Carrera Judicial</p> <p>Licenciado Manuel Ismael García Montúfar, Gerencia de Recursos Humanos</p> <p>Dra. Gloria Biassini, Asesora Cámara Civil</p> <p>Licenciado Flavio Giordano, Asesor Cámara Penal</p> <p>Licenciado Juan Carlos Oxom, Asesor Cámara Penal</p>
<p>16:00 hrs. – 16:30 hrs. <i>Hotel Barceló Guatemala City</i></p>	<p><b>Reunión informal</b> entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>
<p>16:30 hrs. <i>Hotel Barceló Guatemala City</i></p>	<p><b>Reunión final</b><sup>112/</sup> entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>

---

<sup>112</sup>. El tercer párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al final de la visita in situ se realizará una reunión en que participarán los Expertos del Subgrupo, la Secretaría Técnica y el Experto Titular del Estado analizado y/o el funcionario que éste haya designado para apoyarlo de acuerdo con lo previsto en la disposición 10, segundo párrafo, de la presente Metodología. En dicha reunión se precisará, si fuere el caso, la información que excepcionalmente quede aún pendiente de suministrar el Estado analizado por conducto de la Secretaría Técnica y el término en que lo hará y se coordinará cualquier otro tema pendiente que resulte de la visita in situ.”

**AUTORIDADES DE CONTACTO DEL ESTADO ANALIZADO PARA LA  
COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS  
MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA  
TÉCNICA DEL MESICIC**

**ESTADO ANALIZADO:**

**GUATEMALA**

**Verónica Taracena**

Coordinadora de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET)  
Experta Titular de Guatemala en el Comité de Expertos del MESICIC

**Ninette Lopez de Barillas**

Advisor on National and International Cooperation, COPRET

**Rodolfo Valenzuela**

Asesor de la Dirección de indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción,  
COPRET

**Sebastián Herrera**

Asesor de la Dirección de indicadores e Iniciativas de Transparencia y Combate a la Corrupción,  
COPRET

**ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:**

**SAN KITTS Y NEVIS**

**O'Neil Simpson**

Fiscal, Oficina del Fiscal General, San Kitts y Nevis

**SURINAME**

**Rolinne Gravenbeek**

Experta Titular de Suriname en el Comité de Expertos del MESICIC  
Fiscal, Oficina del Fiscal General, Suriname

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC**

**Michael G. Thomas**

Oficial Jurídico

Departamento de Cooperación Jurídica  
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA